

DICIEMBRE 3 DE 1934

64ª REUNION — 6ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES ANTENOR R. FERREIRA Y ROBERTO J. NOBLE

MINISTRO PRESENTE: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; DIPUTADOS PRESENTES: Agüero Santos, Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Ameri Rogelio L., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Arce José, Arnoldi Adolfo, Arrieta Herminio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Bosasso Manuel V., Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Brinolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Domestrio, Bultrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo José M., Cáceres Lorenzo, Candia Cornelio, Cáceres Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carús Agustín J., Castañeiras Alejandro, Coca Joaquín, Contte José A., Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Costa Méndez Nicanor, Dalla Latta Jerónimo, Diekmann Adolfo, Diekmann Enrique, Escalera Facundo, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Ganza Marcelino, García Gorostiza Raúl, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guerrero Manuel, González Maseda Manuel, González Valentín, Graffigna Santiago, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Jardel Enrique C., Lamosa Juan B., López Héctor S., Mancini Rafael, Martínez José Horiberto, Moret Carlos (h.), Mouchet Enrique, Movsichoff Bernardo, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla Tiburcio, Palacin Manuel, Palacin Pedro, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Parodi Misael J., Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pflieger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Pueyredon Carlos A., Radfo Pedro, Ramiconi Luis, Repetto Agustín, Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rozas José E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Oscar, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Aveilino, Simón Padrós Juan, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Urburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Dorna Daniel, Videla Rodolfo G., Vionnet Rodolfo L., Zorda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Aráoz José Ignacio, Becerra Eugenio A. (h.), Bosano Ansaldo Daniel, Cafferata Juan F., Calderón Osvaldo M., Fresco Manuel A., Grisolia Luis, Herrera Bruno J., Loncinas Rafael Néstor, Mouesca Eduarado, Rojas Marcos E., Saravia José M.; CON AVISO: Acosta Guillermo, Aguirrezabala Miguel A., Castro Felipe, Courrel Carlos D., Dogano Alfredo P., Garayalde José María, Inda Rufino, Pomponio Vicente E., Ramírez Manuel (h.); SIN AVISO: Aráoz Eudoro D., Biancoflora Rafael, Buyán Marcelino, Carreras José, Critto Miguel, Dávila Miguel V., De Miguel Benito, Godfrid Juan, Korn Guillermo, Lima Vicente Solano, Magris Amleto, Manacorda Carlos, Marcé Cipriano F., Mattos Luis María, Molina Serapio, Morrogh Bernard Juan F., Ocampo Enrique, Parera Gregorio, Pressacco Juan P., Quiroga Félix, Ruiz Guñazú Jacinto, Taboada Mora Cipriano, Vallejo Luis A., Vignart Uberto F., Wando Eugenio, Zarzaga Marcel J.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo contestando la minuta de comunicación relativa a la ejecución por el Ferrocarril Central Córdoba del puente sobre la calle Roque Sáenz Peña, de la ciudad de Córdoba.

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando copia de la documentación, aprobada, relativa a la construcción de represas en las poblaciones de Aimogasta,

Aminga, Pinchas y Arauco (La Rioja).

- 4.—Indicación del señor diputado Oddone relacionada con el destino del anterior mensaje.
- 5.—Asuntos entrados:

III.—Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando copia de la documentación, aprobada, relativa a las obras de revestimiento de los canales terciarios en los distritos de la zona de riego de Chilceto (La Rioja).

IV.—Peticiones particulares.

- 6.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Bosano An-

saldo, Lencinas, Cafferata, Calderón y Grisolia.

7.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley sobre unificación de impuestos internos, prórroga y distribución del impuesto a los réditos y del impuesto a las ventas.

—En Buenos Aires, a tres de Diciembre de 1934, siendo la hora 15 y 28:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Martínez. — Hago indicación, dada la puntualidad de nuestros colegas, de que se les espere un término prudencial a objeto de formar quórum.

Sr. Dickmann (E.). — ¿A qué llama término prudencial?

Sr. Martínez. — Media hora.

Sr. Dickmann (E.). — Perfectamente.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Ferreira). — Como hay asentimiento, se esperará media hora.

—A la hora 15 y 35:

2

ACTA

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda abierta la sesión con asistencia de 80 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Buira, se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1934.

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad llevando a su conocimiento, que ha prestado preferente atención al pedido que formulara por la resolución sancionada en la sesión de fecha 5 de Noviembre en curso, para que la empresa del Ferrocarril Central Córdoba proceda a la ejecución del ensanche del puente sobre la calle Roque Sáenz Peña, de la ciudad de Córdoba.

Como resultado de las tramitaciones realizadas y en consideración a las dificultades financieras por que atraviesa la mencionada empresa, se ha convenido en que dicha obra tenga principio de ejecución a mediados del año próximo, calculándose poder terminarla en el plazo de tres meses, proponiéndose, al mismo tiempo, como compensación a los beneficios que la misma reportará como mejora edilicia, que la municipalidad local se haga cargo de la remoción de la actual estructura, una vez construido el nuevo puente, cediéndosele los materiales de ese levantamiento, a cuyo efecto se ha solicitado a las autoridades respectivas, la conformidad correspondiente.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Manuel R. Alvarado.

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda a disposición de los señores diputados.

II

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1934.

A la Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiéndole a los efectos establecidos en el inciso a) del artículo 1º de la ley número 10.285, copia completa de la documentación preparada por la Dirección General de Irrigación, que fuera aprobada por el decreto número 50.523 de fecha 25 de Octubre próximo pasado, relativa a la construcción de cua-

7

UNIFICACION DE LOS IMPUESTOS
INTERNOS

Sr. Presidente (Ferreira). — Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre unificación de impuestos.

Está en consideración el artículo 7º. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La Presidencia advierte que deben modificarse los cuadros en la parte correspondiente a la provincia de Salta.

Sr. Alonso. — El artículo 6º ya ha sido votado.

Sr. Martínez. — Habiéndose modificado en el artículo 6º la cantidad correspondiente a Salta, los cuadros del artículo 7º deben ser modificados por Secretaría. Las cantidades aumentan.

Sr. Pena. — Hay que seguir la multiplicación de los pesos.

Sr. Martínez. — Ya está gastada la imagen, señor diputado.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el artículo 7º. La Secretaría hará la modificación correspondiente en los cuadros.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sin observación, se votan y aprueban los artículos 8º, 9º, 10 y 11.

Sr. Noble (R. J.). — Propongo que se den por aprobados los artículos que no se observen.

Sr. Presidente (Ferreira). — Si hay asentimiento, así se procederá.

—Asentimiento.

—Sin observación, se dan por aprobados los artículos 12 a 16.

—En consideración el artículo 17.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

Propongo que la penalidad establecida en este artículo, de 1 a 3 años, se eleve de 3 a 5 años y que se establezca

que el período de inhabilitación debe ser de diez años.

Este artículo establece las garantías que las provincias han de tener con respecto a la distribución que les corresponda de los impuestos al consumo y que se han de hacer efectivos de acuerdo con esta ley. En este concepto, debe contener disposiciones penales de naturaleza preventiva antes que de carácter represivo.

La penalidad debe ser de tal magnitud, que ningún funcionario o empleado del Banco de la Nación pueda omitir, por cualquier motivo, la distribución de la renta que por esta ley se atribuye a las provincias.

Según el artículo 26 del Código Penal, los delitos penados con hasta dos años dan lugar a que puedan ser, no solamente excarcelados los autores, sino también, beneficiados con la condena condicional. Y así resultará, si establecemos para el empleado que se abstenga de hacer la distribución, la penalidad de uno a tres años, como dice el despacho de la comisión, que podrá omitir el cumplimiento de las obligaciones de esta ley sin otro riesgo que el de una pena leve, tan leve que podría ser excarcelable y susceptible de sólo una condena en forma condicional.

Creo que en el rigor de la penalidad debe estar una de las principales garantías que han de tener las provincias de que la renta ha de serles distribuida; y esto ha de conseguirse fundamentalmente sólo si la penalidad no es excarcelable y no da lugar a la condena condicional.

De acuerdo con este mismo criterio, debe elevarse también la de la inhabilitación de los funcionarios del Banco de la Nación, extendiéndola a un término mucho mayor, haciendo que sea por diez años, para que dichos funcionarios y empleados no se abstengan de realizar la distribución del impuesto, ni aun en los casos en que recibieran órdenes de un gobierno fuerte o instrucciones arbitrarias de los altos funcionarios del país.

Por otra parte, como en materia penal la aplicación de las leyes tiene ca-

rácter restrictivo, es necesario consignar expresamente en el artículo que no solamente serán responsables los empleados del Banco de la Nación que se abstengan de verificar la distribución, sino también los miembros de su directorio, para que, en el caso de ser procesados éstos, no pueda argüirse que en su condición de tales no son punibles rehuyendo su responsabilidad.

Sr. Presidente (Ferrelra). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas?

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

El señor diputado por Córdoba plantea, en verdad, una cuestión de importancia.

La garantía que las provincias tienen del cumplimiento de la ley y de que en ninguna forma van a carecer de los recursos que ella les otorga, y que están tan directamente vinculados a su propia autonomía, tiene por base la disposición de que el Banco de la Nación, sea mandatario conjunto de la Nación y de las provincias y de que ni los empleados ni los funcionarios del Banco — incluidos, desde luego, en este término de «funcionarios» los directores — puedan dar órdenes o puedan omitir actos o tener demoras de resultados de las cuales no se acredite al día a las provincias lo que les corresponda por esta ley, o si acreditado, no se les entrega de acuerdo a sus órdenes.

El proyecto del Poder Ejecutivo establecía, en verdad, penas más graves que las consignadas en el despacho. Establecía, que si la renta correspondiente a una provincia no fuere acreditada o entregada puntualmente a la autoridad que determine cada provincia, «será responsable de la omisión o demora el gerente», etcétera. Y la pena que establecía era de uno a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, sin perjuicio, desde luego, de las acciones civiles a que el hecho diera lugar.

La comisión estudió detenidamente este asunto. Creyó que tal vez el proyecto del Poder Ejecutivo era tal vez excesivo en cuanto a las penalidades, que creaba, sobre todo, el relativo a

la inhabilitación, porque no era una inhabilitación especial para el desempeño de esa función sino una inhabilitación absoluta y perpetua; pero no dejó de hacerme cargo de la observación muy sólida del señor diputado por Córdoba. Es cierto que la pena de prisión de uno a tres años va a permitir que en la mayor parte de los casos pueda aplicarse la condena condicional y además la excarcelación durante el proceso. Y personalmente — ya que no puedo hablar en nombre de la comisión, por las dificultades materiales de ponernos de acuerdo, a que se refirió la vez pasada el secretario de la misma doctor Dickmann —, me siento inclinado a aceptar una agravación de estas penas en la forma propuesta por el señor diputado Palacio.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Rogaría al señor presidente de la comisión, manifestara a la Cámara que este asunto ha sido reclamado por el Banco de la Nación en nota enviada al ministro de Hacienda, que éste nos ha hecho conocer. Considera el directorio del Banco que sería difícil obtener empleados responsables que se hagan cargo de un puesto que es reprimido con medidas tan severas por la comisión de hechos que pueden ser, a veces, simples descuidos en el manejo de sus disposiciones.

No me parece que el peligro de la estructura de la ley dependa del cumplimiento de sus deberes por algún funcionario del Banco de la Nación. Es en otra parte adonde no han de alcanzar las penalidades que establezcamos, por severas que sean, donde ha de fallar el régimen de la ley, si hubiera intención de hacerlo. Me parece, pues, que después del largo estudio hecho a este respecto en la comisión, deberíamos dejar el artículo tal como está, estableciendo a lo sumo que para esta clase de delitos no alcanza la condena condicional. Pero elevar la penalidad, luego de haberla rebajado, precisamente después de esos prolijos estudios, me parece un exceso.

Sr. Corominas Segura. — Pido la palabra.

Voy a pronunciar breves palabras, señor presidente, en apoyo de la moción que ha formulado el señor diputado por Córdoba, haciéndome cargo de las observaciones del señor diputado por la Capital, doctor Dickmann.

No es posible que en una ley de esta naturaleza se modifiquen substancialmente los principios básicos del Código Penal. Al contrario, la legislación penal de la República debe ser la que fije y establezca, de acuerdo con el criterio doctrinario general que lo inspira, y que en su hora dió motivo a ilustradas discusiones en el Congreso, cuándo procede y cuándo debe negarse la condena condicional.

Ahora, lo que debemos hacer es fijar las penalidades para las infracciones que pudieran producirse, pero ajustándolas a los enunciados generales de la legislación penal. En consecuencia, el criterio más adecuado es el de fijar una pena que, de acuerdo con la legislación criminal, no permita la condena condicional. Ventaja que tiene la moción del señor diputado doctor Palacio.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

Para decir, en presencia de la observación del señor diputado Dickmann...

Sr. Dickmann (A.). — No es mía; es del directorio del Banco de la Nación.

Sr. Palacio. — ... o que ha hecho suya el señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — Sí, señor diputado. Es justa...

Sr. Palacio. — Cuando en mi proposición fijé que la condena fuera de tres a cinco años, lo hice para no dar lugar ni a la condena condicional, ni a la excarcelación bajo fianza.

En cuanto a «la segunda parte», a que se refirió el señor diputado Dickmann, con mi proposición deseo establecer que los funcionarios del Banco de la Nación, por la penalidad en que incurrirían prestando oídos a los altos funcionarios del gobierno, al ministro de Hacienda o al presidente de la Nación, se abstengan de escuchar sus sugerencias. Así ellos vendrían a ser el

control de esas órdenes, que podríamos calificar de dictatoriales, del presidente de la República, del ministro de Hacienda o de cualquier alto magistrado del país.

Por esto mantengo la proposición tal cual la formulé.

Sr. Presidente (Ferreira). — Corresponde votar el despacho con la reserva de los términos de la pena.

Sr. Martínez. — Lo que está aceptado, porque era implícito, y lo había dicho ya en el informe, es que en la palabra «funcionarios» están comprendidos los directores del Banco de la Nación.

Sr. Noble (J. A.). — Así lo ha establecido la comisión.

Sr. Martínez. — Y lo dije en mi informe, en nombre de la comisión, pero si quiere la Cámara mayor abundamiento, puede votar textualmente las palabras propuestas por el señor diputado por Córdoba.

Sr. Palacio. — Yo creo que debería votarse la palabra «directorio», porque, como he dicho, en materia penal la aplicación de la ley es restrictiva y podrían los jueces absolver a un director del Banco de la Nación por no consignarse expresamente la palabra «directores» en el texto de la ley.

Sr. Iriondo. — Pero dice «funcionarios», y debe entenderse también al director, como funcionario superior.

Sr. de la Vega. — Es evidente que el concepto de funcionario se refiere a una jerarquía superior a la de empleado, y por lo tanto con mayores atribuciones y responsabilidades.

Sr. Corominas Segura. — En este caso se aclara y fija el concepto.

Sr. Repetto (N.). — Este delito que se castiga tan severamente, sólo puede ser cometido por los funcionarios de la casa central del Banco de la Nación.

Sr. Corominas Segura. — Es exacto.

Sr. Repetto (N.). — Se trata de acreditar las sumas que correspondan a cada una de las provincias. Esto se refiere a una distribución que se hace desde aquí.

Sr. Ahumada. — Se paga en cada provincia, pero se acredita en la casa central.

Sr. Repetto (N.). — El artículo se refiere solamente a acreditar.

Sr. Ahumada. — La palabra «acreditar», en realidad, corresponde a los dos hechos: la liquidación y la entrega.

Sr. Corominas Segura. — Comprende de la casa matriz y las sucursales.

Sr. Repetto (N.). — Sería el caso de falta de entrega de las sumas correspondientes. En realidad se trata de omisiones que resultan completamente inexplicables e ilógicas, porque yo no sé qué interés podrá tener un funcionario del Banco de la Nación en dejar de acreditar sumas que pertenecen a las provincias en concepto de impuestos internos, o en negarse a entregarlas. Solamente en el caso de que ese funcionario hubiera perdido la razón, podría incurrir en semejante delito. No me explico tanta severidad.

Sr. Vicchi. — Hay muchos intereses para que eso se produzca. No vivimos desgraciadamente en una Arcadia, y el gobierno central puede utilizar todos esos resortes aun con fines políticos. De ahí la necesidad de tomar todas estas medidas.

Sr. Repetto (N.). — ¿El gobierno central?

Sr. Vicchi. — Sí, señor. Y si los funcionarios no tuvieran una responsabilidad severa, como corresponde, podrían ser instrumentos dóciles.

Sr. Repetto (N.). — Confieso que no había llegado hasta allí en mis sospechas.

Sr. Martínez. — Pido la palabra. Me parece de importancia dejar claramente establecido el alcance de este artículo.

Los delitos por omisión o por demora que castiga este proyecto, pueden cometerse en la casa central del Banco o en las sucursales. El señor diputado por la Capital tenía razón cuando se refería a la primera parte, porque la renta de impuestos internos, una vez coleccionada por las sucursales, va directamente a la casa matriz; y es

ésta la que debe hacer la distribución de acuerdo a las disposiciones de estilo, de manera que su omisión o la tardanza en verificarlo aquí, hace incurrir a los responsables en las penas establecidas en el artículo 17.

Además, una vez acreditada a las provincias la parte que les corresponde, si no mediara orden de autoridad competente como sería, por ejemplo, un embargo judicial, también está penada su retención indebida, si por cualquier motivo de orden interno del Banco o por sugerencias del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Hacienda de la Nación, se pretendiera ejercerlo respecto de alguna provincia.

Ahora, conviene insistir en que era necesario crear la figura de este delito, haberlo separado, como lo ha hecho la comisión, de los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal que rigen la conducta en general de los funcionarios públicos; consideramos que es menester hacerlo, porque la penalidad establecida castiga hechos que en algunos casos no venían antes a ser delito, pero que en este caso lo son, por la repercusión extraordinaria y las funestas consecuencias que vendrían a tener, desde el momento en que destruirían toda la estructura de la ley y pondrían en peligro la autonomía financiera de las provincias y por lo tanto su propia autonomía política.

Esta ley, que se ha hecho con el concurso de las provincias, reposa sobre la garantía de que en ninguna forma servirá para ser un instrumento de tortura fiscal de las provincias, que éstas puedan quedar sin sus recursos legítimos recaudados por la Nación y el modo de disipar toda preocupación y borrar el fantasma que pueda levantarse al respecto, es creando esta figura de delito y aplicando sanciones severas para los que lo ejecuten; para que su existencia sirva, no sólo como una sanción justiciera, sino como una potente prevención.

Sr. Rodríguez. — Pido la palabra. Siento mucho disentir con la propo-

sición que acaba de hacer el señor diputado por Córdoba.

Creo que las penalidades que impone el artículo despachado por la comisión son perfectamente suficientes, porque a más de ellas existe la penalidad moral.

No tengo el temor de que la ley deje de cumplirse por la penalidad mayor que ha sido propuesta, tanto más cuanto tenemos en otros sentidos penalidades que en realidad no lo son. Está el caso del concurso civil, en que a los tres años de declararse quedan completamente exentos de pena los concursados y en ciertos casos defraudada la mayoría de los acreedores, por lo que creo que a ese respecto debieran ser reformadas las disposiciones del Código Civil.

Ahora, en lo que se refiere a las penas propuestas por el artículo despachado por la comisión, considero que sería exagerado ampliarlas y que convendría dejarlo tal cual está.

Por las razones expresadas, voy a votar el artículo despachado por la comisión.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el artículo 17, en la forma despachada por la comisión, con la reserva indicada respecto de las penas.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Ferreira). — Ahora, corresponde votar la pena de uno a tres años de prisión, que establece el despacho.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Pena. — ¿De cuántos votos?

Sr. Prosecretario (Madero). — Han votado a favor 37 señores diputados.

Sr. Pena. — Que se rectifique.

—Rectificada la votación, resulta igualmente negativa.

Sr. Dickmann (A.). — ¿De cuántos votos?

Sr. Prosecretario (Madero). — De 36 votos; votan 91 señores diputados.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar la indicación del señor diputado por Córdoba que eleva la pena, estableciendo tres a cinco años.

Sr. Palacio. — Y la inhabilitación por diez años.

Sr. Presidente (Ferreira). — Después.

Sr. Vicchi. — Acabamos de votar el despacho de la comisión y ha sido rechazado. Lo que ahora hay que votar es la proposición del señor diputado por Córdoba.

Sr. Dickmann (A.). — Lamento insistir. Pido que se rectifique nuevamente, pues parece que algunos diputados tienen duda sobre el resultado...

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a rectificar por segunda vez la votación. La Presidencia ruega a los señores diputados que estén por el despacho de la comisión, que se pongan de pie.

—Se rectifica nuevamente la votación y resulta afirmativa.

Sr. Palacio. — Podría rectificarse otra vez, pero a la inversa, poniéndose de pie los diputados que están por la negativa.

Sr. Alonso. — Pido la palabra.

En vista del resultado de la votación, voy a hacer mía la sugestión hecha por el señor diputado por la Capital, de que se agregue una cláusula por la cual se establezca que no alcanzan los beneficios de la condena condicional a las penas que se impongan en razón de infracciones a este artículo.

Sr. Presidente (Ferreira). — Sírvase redactar el artículo, señor diputado.

¿El señor diputado Palacio insiste en su indicación de que se rectifique la votación?

Sr. Palacio. — Propongo que se rectifique, votando a la inversa. Después se considerará la indicación del señor diputado.

—Ocupa su banca, el señor ministro de Hacienda, doctor Federico Pinocho.

Sr. Alonso. — Postergo mi indicación hasta que se realice la rectificación que solicita el señor diputado.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a rectificar a la inversa. Sirvanse ponerse de pie los señores diputados que aceptan la modificación propuesta.

— Resulta negativa de 43 votos. Votan 91 señores diputados.

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda rechazado el agregado propuesto por el señor diputado y aprobado el despacho de la comisión.

Sr. Martínez. — Lo que no hay necesidad de votar, porque ya ha quedado bien aclarado, es que el término «funcionario» comprende a los directores del Banco de la Nación.

Sr. Presidente (Ferreira). — Está en consideración la proposición del señor diputado Alonso, que se va a leer por Secretaría.

— Se lee:

Las penas a que se refiere este artículo no gozarán de los beneficios de la condena condicional.

Sr. Palacio. — Ni de la excarcelación bajo fianza, podría agregarse.

Sr. Presidente (Ferreira). — Está en consideración la moción del señor diputado Alonso, con el agregado que acaba de proponer el señor diputado Palacio. Se va a leer por Secretaría.

— Se lee:

Las penas a que se refiere este artículo no gozarán de los beneficios de la condena condicional ni de la excarcelación bajo fianza.

Sr. Presidente (Ferreira). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Sin observación, se aprueba el artículo 18.

— En consideración el artículo 19.

Sr. Ahumada. — Hago indicación de que se vote inciso por inciso.

— Asentimiento.

— Sin observación, se aprueba el inciso a).

— En consideración el inciso b).

Sr. Pena. — Pido la palabra.

A continuación de los incisos hay una referencia a un conjunto de leyes y disposiciones vigentes, que deberán ser derogadas por las legislaturas provinciales como resultado de este convenio. Cabe indicar que sólo se menciona, con respecto a la provincia de Tucumán, el impuesto sobre pólizas y primas de seguros del 14 de Junio de 1933. Hay otras provincias en las mismas condiciones.

Sr. Ahumada. — Corresponde tratarlo en el último inciso. Ahora estamos considerando el inciso b).

Sr. Pena. — Yo hago la aclaración y creo que basta y sobra con ella para que la comisión la tenga en cuenta en las sanciones ulteriores de este despacho, respecto de que Entré Ríos y otras provincias quedarán en las mismas condiciones que la de Tucumán que ya está incluida, porque se seguiría el mismo procedimiento.

Sr. Presidente (Ferreira). — Si no hay otra observación, se dará el inciso por aprobado.

— Se da por aprobado.

— En consideración el inciso c).

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

Firmo el despacho en disidencia especial sobre este inciso, y deseo dar, en la forma más breve posible, los motivos que he tenido para asumir esa actitud.

Desde luego, el asunto a que se refiere este inciso dió lugar a una serie de discusiones prolongadas en el seno de la comisión, porque según la solución que se adoptara, quedarían las provincias con sus derechos fiscales más o menos en las condiciones normales, o podía, si se llegara a una solución extrema, colocárselas en una situación totalmente desairada, que fatalmente las llevaría a la obligación imperiosa de no acogerse a los beneficios de esta ley.

El señor ministro de Hacienda manifestó con claridad, desde el principio de las discusiones, que en este asunto

había lo que puede llamarse el programa mínimo, por una parte, y el programa máximo, por otra. El programa mínimo consistía en limitarse a solucionar los problemas existentes en este momento en el escenario económico del país; el programa máximo iba más allá; no se limita a dar esas soluciones sino que llega a prever las dificultades que podrían surgir en lo sucesivo, tomando para esos casos las medidas de previsión necesarias.

El proyecto del Poder Ejecutivo en realidad contenía el programa mínimo. El artículo 15 de ese proyecto se limitaba a prohibir a las provincias que gravasen los artículos afectados por los impuestos internos, y las materias primas y subproductos que se dedicaran a la producción de dichos artículos. Agregaba el artículo 15, lo siguiente. «Toman igual compromiso respecto de cualquier otro producto alimenticio en estado natural o manufacturado.»

En el seno de la comisión se consideró primero la posibilidad de prohibir a las provincias gravar tres clases de productos: alimenticios, vestidos y combustibles. Ese temperamento no prosperó y en una de las últimas reuniones celebradas, el señor diputado por la Capital, doctor Adolfo Dickmann, propuesto el inciso que la comisión aceptó definitivamente y que está incorporado al despacho.

Según dicho inciso, las provincias quedan absolutamente inhabilitadas para gravar en lo sucesivo la producción de materias primas, derivados y subproductos, sin hacerse excepción de ninguna clase. El Poder Ejecutivo desgrava exclusivamente las materias primas que se destinaran a la fabricación de productos gravados con impuestos internos nacionales. De acuerdo con este inciso del despacho, las provincias no podrán gravar la producción de materias primas, se dediquen o no estas materias a la producción de artículos gravados con impuestos internos nacionales, vale decir, que se establece una restricción notoriamente mayor que la contenida en el artículo propuesto por el Poder Ejecutivo.

Sr. Dickmann (A.). — Discúlpeme el señor diputado, porque lee sólo la mitad del artículo.

Se refiere al gravamen a los artículos destinados al consumo nacional, pero de ninguna manera a los artículos destinados al consumo interno de las provincias.

Sr. Ahumada. — Eso es otra cosa. Ya iba a eso.

Sr. Dickmann (A.). — Es que dió la impresión de que se tratara de una prohibición absoluta.

Sr. Ahumada. — La prohibición, como acabo de señalarlo, tiene aspecto general.

Reconozco que el señor diputado Dickmann propuso una restricción a aquella limitación: las provincias no podrían gravar la materia prima destinada al consumo del país, pero sí podrían gravar la dedicada exclusivamente al consumo dentro del territorio de la propia provincia; pero de ahí surge el problema de averiguar cuándo una materia prima se dedica exclusivamente al consumo provincial y cuándo no.

Sr. Corominas Segura. — Tendría que haber, entonces, un control especial, y se necesitarían aduanas interprovinciales para constatar cuando salen de las provincias los productos.

Sr. Ahumada. — Exactamente.

Si llegara a sancionarse este inciso, quedarían muchas provincias en situaciones desventajosas que las harían trepidar antes de acogerse a la ley. Pongo un caso: La provincia de Santiago del Estero tiene, entre las fuentes fiscales de mayor importancia, los impuestos a la explotación de bosques y producción de carbón; de acuerdo con este inciso no podría en lo sucesivo cobrar esos impuestos, y eso implicaría la supresión de un recurso que representa regularmente de 1.000.000 a 1.500.000 pesos moneda nacional. Otras provincias, como Catamarca, La Rioja y Salta, tienen impuestos análogos, que producen menor cantidad de recursos, porque la explotación es de menor intensidad.

Ejemplos como los de estos casos

típicos que ofrezco, podrían repetirse hasta el infinito en otras provincias. Y conste que habla un diputado representante de una de las provincias que menos interés puede tener en que estas restricciones no se lleven a grado extremo; hablo como diputado de la Nación, en el legítimo deseo de que los principios federativos que nos rigen sean respetados en la mayor medida posible: con criterio estrictamente localista, debería plantear esta cuestión un diputado por Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, por alguna de las provincias más ricas y de mayor producción.

En definitiva, y cumpla así la promesa de no ser muy extenso en la materia, salvo que el debate que se promueva lo requiera, yo propongo a la Cámara que este inciso reduzca la prohibición a las provincias de tal modo que les impida en lo sucesivo solamente gravar la producción de artículos alimenticios. Las materias primas que se destinen a la producción de artículos gravados con impuestos internos nacionales no podrán ser gravadas por las provincias, porque lo prohíbe el artículo 21 del despacho, cuando dice que las provincias productoras no podrán gravar ni las materias primas ni sus subproductos que se utilicen para la producción y fabricación de los artículos sujetos a los impuestos internos nacionales; de tal manera que ese aspecto del problema está netamente contemplado por el artículo 21. Y el otro aspecto, el de los productos alimenticios a que se refiere el artículo 15 del proyecto del Poder Ejecutivo, quedaría perfectamente contemplado con este inciso, que propongo en suplantación del que objeto. «Que las provincias adheridas se obligan por el término de vigencia de esta ley, a no gravar en lo sucesivo los productos alimenticios en estado natural o manufacturados.»

En esa forma se resuelven los dos aspectos fundamentales que deben ser contemplados en esta ley: evitar que las provincias graven indirectamente los productos que actualmente sufren impuestos internos nacionales, así co-

mo las materias primas que se destinan a la elaboración de esos productos. Por otro lado se les prohíbe, dando así un aspecto simpático a esta ley, que graven cualquier clase de productos alimenticios, estén o no ellos gravados con impuestos internos nacionales. Esta última prohibición es tan amplia que no admite excepciones de ninguna clase.

Dejo así fundada someramente esta modificación del inciso c), del artículo 19, que someto a la consideración de la Honorable Cámara.

Sr. Coca. — ¿Por qué para los artículos alimenticios y no los otros? ¿Acaso el vestido y la habitación no tienen importancia para la población? ¿Solamente tiene importancia lo que se come?

Sr. Ahumada. — Es evidente; pero esa amplitud llevaría demasiado lejos.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Me ha tomado de sorpresa esta disidencia. La he conocido recién en el momento de firmarse el despacho. El señor diputado ha hecho un recuerdo que no es completo. Este artículo tiene una historia más larga. El señor diputado por Tucumán, ingeniero Simón Padrós, propuso en el seno de la comisión que fueran incluídas entre las prohibiciones a las provincias la de gravar con impuestos a la producción la pasta de tomate, el aceite y el arroz. A mí, que lo acompañaba en el concepto de que no debían gravarse por parte de la provincia artículos que consume el resto del país, no me pareció, sin embargo, conveniente reducirlo a sólo esos tres, sino darle un concepto genérico y fué con ese motivo que me encargué de redactar el artículo tal como figura en el despacho y que mereció no sólo la aprobación de la mayoría, sino también el apoyo del señor ministro de Hacienda.

No podía ser de otro modo, señores diputados. No valdría la pena y no nos habríamos esforzado tanto, ni habríamos tomado muy en serio esta unificación, si dentro de un par de años el país se encontrara de nuevo ante los gravísimos problemas económicos en

que lo ha colocado la anarquía impositiva de las provincias. Parecería que aquí no se tratara más que de repararse unos cuantos pesos más o menos bien habidos. De lo que se trata es de algo más profundo, de algo que amenazaba la existencia misma de la unidad política del país, por la lucha entablada entre las provincias entre sí y de éstas con la Nación. Los socialistas, hemos acompañado al señor ministro de Hacienda decididamente en este aspecto de la unificación, aun cuando sobre bases distintas a las por él propuestas. Pero si no se tomaran los recaudos que establece este inciso, la ley sería casi inocua.

Evidentemente, lo que ha suscitado este problema es la situación del azúcar, del vino, del alcohol y algunos otros productos que no podían continuar gravando al consumo de la Nación, por decisión exclusiva de las provincias productoras y graves perjuicios para las propias industrias. En las provincias de Corrientes, de Jujuy, de La Rioja y de Catamarca — esta última representada por el señor diputado — los impuestos internos se clasifican de dos maneras: una tasa para los productos nacionales y otra diferencial, que en Catamarca llega al doble, para los productos importados; es decir, las provincias, substituyéndose a la facultad constitucional reservada exclusivamente a la Nación, crean sus propias aduanas.

En las provincias de Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy, está establecido el conocido impuesto a su producción vinícola y azucarera, que, en realidad, es un impuesto al consumo de la Nación. Y como si eso no fuera suficiente, provincias hay como la de San Juan, que han agotado todos los recursos y han establecido impuestos diferenciales y hasta primas a la exportación. La cerveza elaborada en San Juan tiene un impuesto menor para el consumidor interno, y una prima de 15 centavos para cuando sale fuera de la provincia. La cerveza que llega de otras provincias está gravada con un impuesto de 20 centavos por litro.

Sr. Ruiz. — Esa prima a la cerveza está derogada.

Sr. Dickmann (A.). — Estaba hasta el año 1933. No sé si ahora está derogada.

Tampoco se pueden introducir mistelas ni uva de otras provincias. En San Juan no permiten la entrada de uva de Mendoza para elaborar vino. Lo mismo acontece en el Norte, donde hay provincias que no permiten la entrada de caña de azúcar de otras vecinas.

Evidentemente, el asunto es de magnitud, en cuanto al ordenamiento económico del país. Y el señor diputado Simón Padrós, que ve las cosas con claridad, ha percibido la posibilidad, ante la desviación de las facultades provinciales, que éstas graven otros productos no comprendidos por la unificación, como ya lo anunció en el seno de la conferencia algún ministro de Hacienda provincial. ¿De qué valdría, pues, que se hiciera esta ley, que tiene muchos defectos, pero que tiene grandes virtudes, si ella no ha de impedir que a un breve plazo se produzca una nueva lucha económica entre las provincias argentinas?

Por otra parte, si realmente se hubiese cumplido la Constitución nacional y los gobiernos federales impidieran a tiempo a las provincias estas demasías económicas, no creo que hubiéramos llegado a los extremos a que se ha llegado. Este artículo, en realidad de verdad, no viene sino a repetir el precepto constitucional que prohíbe a las provincias gravar el consumo nacional. Las provincias son dueñas de gravar el consumo dentro de su territorio; pero cuando la materia elaborada sale de sus límites y va al consumo nacional, la imposición de esos productos significa gravámenes de exportación.

Me parece tan clara, tan amplia, tan conveniente y tan generosa la disposición, que sólo un escrúpulo muy explicable en el señor diputado, tan atenido a la autonomía, pero que no lo ha estado tanto cuando se trataba de su propia provincia, ya que no ha com-

batido cuando ella estableció el doble impuesto al vino extranjero...

Sr. Ahumada. — Nunca he sido legislador en mi provincia.

Sr. Dickmann (A.). — Pero no ha tenido siquiera una crítica para esa ley. En cambio, la ha hecho severa a esta disposición en defensa de presuntas facultades provinciales.

No quiero decir más, porque creo firmemente que el buen criterio de la Honorable Cámara hará que se vote este inciso, que es uno de los buenos que contiene esta ley.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Yo, señor presidente, soy de los que han acompañado en el seno de la comisión el criterio central que ha presidido la redacción de este artículo. Conuerdo en que esta ley habría carecido en buena parte de eficacia para la consecución del fin económico que persigue, si no contuviera disposiciones que puedan impedir en el futuro la lucha económica entre las provincias o entre éstas y la Nación.

De tal suerte que este inciso, si fuera sancionado por el Congreso, vendría a tener un hondo significado en materia económica, tendiente a la unidad nacional en dicha materia. La restricción que propone el señor diputado por Catamarca la conceptúo aceptable, y así lo ha pensado la mayoría de la comisión, según entiendo. Si bien es cierto que limita el alcance de la disposición a una categoría de productos, quizá la más digna de ser considerada en esta excepción, hay en la misma ley otra disposición que viene a ser el recurso inestimable para que la lucha económica que todos tememos, no pueda producirse en el futuro. Y esa disposición es precisamente el artículo 21 que ha sido citado recién en este debate. Por este artículo, en la hipótesis de que cualquiera provincia incurriera en la demasía de gravar su producción con fines fiscales, que pudieran producir un principio de guerra económica con otra provincia, podría ser detenida en ese propósito simplemente por el medio de crear un impuesto interno nacional al artículo gravado por la pro-

vincia, porque de esa manera entraría en juego lo que establece dicho artículo 21, es decir, que todas las provincias se obligan, al adherir a esta ley, a no gravar los artículos que sean aquí objeto de un gravamen interno nacional. Así, el Congreso se reserva el recurso eficaz e inmediato y directo para impedir en el futuro que las provincias puedan iniciar una lucha económica similar a la que hemos querido cortar con esta ley.

Es importante que quede sentado explícitamente en este debate, cuál es el propósito que inspira al artículo 21 en conexión con el inciso c) del artículo 19, en discusión. Conviene, además rectificar un concepto que acaba de enunciar el señor diputado por la Capital, quien dijo que la Constitución no autoriza la imposición de gravámenes a la producción por parte de las provincias; él hablaba de gravámenes al consumo nacional.

Tal afirmación no es exacta. La Constitución autoriza a las provincias a imponer gravámenes a su producción y, evidentemente, al consumo nacional por ese medio. Lo que la Constitución prohíbe es que las provincias graven el comercio. Esa es la doctrina de la Suprema Corte: ha declarado constitucionales los impuestos a la producción e inconstitucionales los que, en alguna medida, puedan restringir el comercio interprovincial. No insistiré sobre el particular, pero esa es, en síntesis, la doctrina sustentada por la Corte.

Sr. Martínez.—Pido la palabra, para decir muy pocas.

En primer lugar reconozco con justicia la acción eficaz que ha realizado el señor diputado, doctor Dickmann, cooperando en una forma inteligente al trabajo de la comisión y perfeccionando en muchos puntos esta ley, no obstante sus disidencias de fondo.

Sr. Dickmann (A.). — Al igual que mis colegas de sector...

Sr. Martínez. — Al igual que varios de sus colegas, que me complazco en reconocer.

Nos encontramos en presencia de este inciso que despierta indiscutible-

mente grandes simpatías porque le da un sentido y contenido más amplio a la ley de unificación. No se trata de hacer únicamente una ley de unificación de tasas y de reparto entre la Nación y las provincias dentro de los actuales impuestos al consumo y a la producción, sino también una ley destinada a evitar la guerra económica entre las provincias y que se traben la circulación comercial entre ellas.

Se sabe por esta ley que en adelante por un período de tiempo, en virtud de este acuerdo entre la Nación y las provincias, una serie de productos útiles para la masa consumidora no podrán ser gravados.

Creo que con la explicación que ha dado el señor diputado por la Capital, que reduce el alcance de este artículo, de acuerdo con el texto de la misma, a los destinados al consumo interno de la Nación, la preocupación de algunas provincias al respecto no tendría ya razón de ser.

Peró quería, además, hacer la salvedad respecto a artículos que no serían necesarios y que tal vez fueran injustamente desgravados, en virtud de esta disposición. Me refiero, por ejemplo, a la objeción que ha formulado la provincia de Córdoba sobre el impuesto a la cal. Ese impuesto a la cal que representa una cifra muy reducida entre los ingresos de la provincia de Córdoba — creo que 50 ó 60.000 pesos — viene a ser, en realidad, un impuesto a las ganancias por el precio que tiene el producto en el mercado interno del país.

Para salvar esa y otras dificultades semejantes sin alterar el contenido del artículo, me parece que bastaría con ampliar en el artículo 26 que se refiere a las excepciones, la lista de éstas y poner junto con el petróleo todos los productos de la minería. Quedarían así comprendidos entre éstos, la cal, el plomo, el hierro, el yeso y otros que por su imposición moderada podrían ser una fuente de recursos para las provincias.

Dejo, entonces, establecido que al tratarse el artículo 26 pedirá ese agregado.

Nada más.

Sr. Ghioldi. — Quería observarle al señor diputado por Córdoba, que al impuesto a la cal no se lo ha imputado como un impuesto al consumo.

Sr. Martínez. — Por eso he dicho, que para evitar cualquiera interpretación equivocada, me parecía que lo mejor que se podía hacer, sería ampliar las excepciones del artículo 26, agregando los productos de la minería.

Sr. Dickmann. (A.). — Después de votado este inciso cabría su proposición.

Sr. Martínez. — Exactamente, pero hago ahora la reserva sobre el artículo 26.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

He escuchado con toda atención al señor presidente de la Comisión de Presupuesto, y en realidad no he alcanzado a comprender cuál es su posición definitiva en este caso especial que he planteado con motivo del inciso c) del artículo 19.

Nos ha traído a colación el señor diputado, el asunto de la cal de la provincia de Córdoba, que realmente debe ser contemplado en otro artículo y no en el que estamos considerando.

Declaro honradamente, que mi propósito primordial ha sido defender en el seno de la Cámara, la eliminación lisa y llana de este inciso, porque lo considero un atropello a las facultades impositivas de las provincias; pero ante sugerencias de colegas de la Comisión de Presupuesto, opté por presentar a la consideración de la Cámara el temperamento conciliador que he dado a conocer y que por escrito he entregado a la Secretaría de la Cámara.

El señor diputado Dickmann hacía la observación, que se repitió hasta el cansancio en la comisión, de que si esta ley no preveía la posibilidad de que las provincias se dedicaran en lo futuro a crear nuevos impuestos a los artículos, la guerra económica interprovincial, con la consiguiente superposición impositiva, habría de reproducirse de aquí a corto plazo.

Peró frente a esa posibilidad surge este interrogante de mayor trascendencia: ¿Tiene derecho el Congreso nacional, tienen derecho las actuales le-

gislaturas provinciales para coartar definitivamente, en la medida proyectada, las facultades impositivas de las provincias para lo sucesivo, por una solución momentánea que va a contemplar exclusivamente la situación económica actual? ¿Se va a maniatar a las provincias durante 20 ó 30 años impidiéndoles el desenvolvimiento de su derecho fiscal? Este problema es más grave desde el punto de vista nacional que aquel otro de la posibilidad de que la guerra económica interprovincial se reproduzca de aquí a unos cuantos años.

Preseindo en este caso en absoluto de los intereses de mi provincia que, repito, no tienen importancia; pues a Catamarca poco le puede interesar que se le coarte su derecho de gravar los artículos, porque su producción es limitada en extremo. Traigo la cuestión; porque me preocupa el problema de orden institucional.

A los diputados de provincias que piensan votar el despacho, les planteo esta pregunta: ¿Pueden las actuales legislaturas provinciales adherir a esta ley, renunciando en absoluto al derecho de gravar toda clase de materias primas que se produzcan en los respectivos territorios? Me explico que las legislaturas de Tucumán, de Salta o de Jujuy hagan renuncia al derecho de gravar el azúcar, porque han de recibir de inmediato el beneficio de una compensación: se desgrava el azúcar en el orden provincial, pero se la grava en el nacional. Y en ese producido, las provincias tienen su parte. Pero pongo el caso opuesto: que en la provincia de Corrientes, pongamos por caso, se intensifica la producción del arroz, o en la provincia de Santiago del Estero recrecece la explotación de los bosques, ¿habrán perdido esos Estados federales el derecho de gravar los productos de esas industrias locales? ¿A cambio de qué compensación? ¿Por qué se les dé una participación en el impuesto al azúcar, al alcohol, al tabaco?

No hay que olvidar que el derecho que tienen las legislaturas en materia

fiscal no es un reconocimiento gratuito que les hace el Congreso de la Nación. Viene desde los orígenes de la organización constitucional y política del país.

Recuerdo que a propósito de este problema, un eminente tratadista francés, Gastón Jèze trató el punto en un gran diario argentino: ¿Hasta dónde pueden las provincias renunciar a sus derechos en materia fiscal por una simple solución momentánea de unificación de impuestos internos?

Sr. Martínez. — Jèze, se pronuncia precisamente en contra de la tesis del señor diputado. Dijo que la unidad del país se había acrecentado; que era tan absurdo hablar en la Argentina de rivalidad entre las provincias, como hablar en Francia de la lucha de Borgoñones y Armagnacs. De manera que el argumento del señor diputado está en contra de la tesis que sostiene.

Sr. Ahumada. — Posiblemente esté en un error el señor diputado. Jèze era partidario de la unificación, pero tenía sus dudas sobre el derecho de las provincias a hacer renunciaciones de sus derechos fiscales.

Sr. Martínez. — Voy a pedir el texto.

Sr. Ghioldi. — En todo caso, para asuntos argentinos creo que nosotros tendremos más autoridad que Jèze.

Sr. Ministro de Hacienda. — Es evidente.

Sr. Dickmann (A.). — Es una observación exactísima, pero el señor diputado cita mal a Jèze...

Sr. Martínez. — Tiene un capítulo especial...

Sr. Ahumada. — Creo que para entender a Jèze estoy por lo menos en iguales condiciones que el señor diputado por la Capital. Perdóneme el señor diputado.

Sr. Dickmann (A.). — Tal vez en condiciones superiores.

Sr. Ahumada. — He traído a colación estos antecedentes, no porque yo me incline por esta o aquella opinión del financista francés, sino porque al plantearse en esa oportunidad el problema que me preocupa, nuestro constitucionalista González Calderón rebatió algunos puntos de vista de Jèze y

con ese motivo el asunto tomó actualidad.

El problema se va a replantear ahora si el Congreso de la Nación llegara a sancionar en forma ilimitada esa restricción al derecho de las provincias para gravar su propia producción.

Si la actual Cámara de Diputados cree que está en su derecho al imponer esa restricción, que lo haga, pero yo cumplo honradamente con mi deber al exponer en la Cámara mi opinión personal y mis escrúpulos, esos escrúpulos de orden constitucional a que se ha referido el señor diputado Dickmann y que los considero totalmente legítimos.

Sr. Dickmann (A.). — Hay muchas otras restricciones impuestas a las provincias. ¿El señor diputado no ha encontrado, para disentir, otra que ésta, que tiende a poner orden económico en la Nación?

Sr. Ahumada. — He recordado al hablar en general que en el artículo 18 y siguientes hay una serie de restricciones al derecho de las provincias, pero restricciones justificadas, porque todas ellas se refieren a los productos, materias primas y subproductos y sus derivados gravados con impuestos internos nacionales. Es cosa muy distinta.

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra. Considero indispensable aclarar algunos conceptos vertidos en la discusión de este asunto.

Es innegable que la ley de unificación persigue dos finalidades, o debería perseguirlas; una, es resolver la situación del presente, contemplar las situaciones de hecho en que las provincias, habiendo usado en forma más o menos elástica de la facultad impositiva concurrente, han establecido todo el esqueleto de su presupuesto a base de los impuestos al consumo y a la producción. Las provincias no podrían haberse acogido a esta ley si no se hubieran contemplado las situaciones de hecho. Pero no podría admitirse que la ley de unificación sólo sirve para resolver las situaciones de hoy, porque sería evidentemente una imprevisión del legislador no contemplar la posibilidad de que la guerra interprovincial im-

positiva se derivara hacia otros frentes y hacia otras fuentes de producción. Este segundo aspecto es el que ha querido contemplar en toda su amplitud el inciso c) del artículo 19.

Recordó bien el señor diputado por la Capital manifestaciones oídas en el seno de la Comisión de Presupuesto, de algún ministro de Hacienda de alguna de las provincias argentinas, quien dijo que estaba *in mente* de su respectivo gobierno la creación de impuestos sobre productos que hasta el momento habían permanecido desgravados.

El señor diputado por Catamarca preguntó qué compensación se iba a brindar a las provincias por la renuncia de esa facultad impositiva. Y ahí es donde deseo exteriorizar mi personal discrepancia.

Las provincias tienen compensación fiscal al renunciar a los impuestos que actualmente gravan su producción. Lo creo y lo declaro lealmente: considero que con el despacho de la comisión no ha de haber provincia argentina que pueda invocar una razón de perjuicio fiscal para no acogerse a la ley. Pero aceptar, el concepto y la letra del inciso c) del artículo 19, no es precisamente en compensación de determinada concesión sino persiguiendo una finalidad que es compañera y que es solidaria de la génesis de esta ley. No se discute la facultad constitucional, no se ignora tampoco que no hay una compensación inmediata y efectiva por la renuncia de esa facultad impositiva de no gravar otros productos de los que no han estado gravados hasta el presente con impuestos internos provinciales.

Sr. Corominas Segura. — ¿Me permite señor diputado?...

De acuerdo con el inciso c) del artículo 19, que se discute, las provincias no podrían gravar esos artículos, pero ¿podría gravarlos la Nación?

Sr. Simón Padrós. — Sí, señor diputado. Es evidente.

Sr. Dickmann (A.). — Y su producido entraría en la masa común después de 1940.

Sr. Simón Padrós. — No hay ninguna limitación legal al respecto.

Sr. Corominas Segura. — ¿Qué destino tendrían los recursos que se obtuvieran?

Sr. Simón Padrós. — Ese punto ha sido considerado por la Comisión de Presupuesto y se pidió que los recursos que pudiera obtener la Nación por nuevos impuestos a productos no gravados entraran en el reparto...

Sr. Ministro de Hacienda. — Entran.

Sr. Simón Padrós. — ...y el señor ministro lo acepta, en parte, después del año 1940, pero no antes, por una razón convincente, cuando decía: si quieren ir a las buenas que vayan a las malas; si quieren tener participación de los nuevos impuestos, que corran también el riesgo de una participación menor, en el caso problemático a que hacía referencia el señor diputado Repetto de que existiera un déficit para atender la asignación fija y permanente de los cuatro primeros años de la ley. De manera que a partir del año 1940, una vez establecido el porcentaje de reparto, entran las provincias a coparticipar sobre la totalidad de los impuestos internos percibidos por la Nación.

Queda establecido, entonces, entiendo que con toda claridad, que este inciso c) no está sujeto a compensación económica, mejor dicho fiscal o financiera de ninguna clase, pero sí tenía la gran ventaja económica de tranquilizar la producción, estableciendo una igualdad de costos en todas las provincias que elaboran los mismos productos.

A ese respecto no debo silenciar mi opinión a las palabras pronunciadas por el señor presidente de la comisión, en el caso general de la minería. No me opongo personalmente a la extensión de permitir la franquicia impositiva a las provincias en todos los productos de la minería y no solamente a los derivados del petróleo; pero quiero hacer notar que es un arma peligrosa para el interés económico de esa industria de la provincia de Córdoba, porque no es ese el único Estado que tiene cales y mármoles. Si al margen o a la sombra del impuesto que la provin-

cia de Córdoba pueda seguir manteniendo sobre sus cales y sobre sus mármoles, las otras provincias que también los producen los eximieran ya no sería un impuesto al rédito, un impuesto a las ganancias, sino un factor de costo, desde que la competencia entre las cales de Córdoba y las de Santiago del Estero, por ejemplo, entre los mármoles de Cruz del Eje y los de San Juan, va a haber una diferencia impositiva, estableciéndose indirectamente una prima a la producción por el solo hecho de que una provincia no grave lo que grava la vecina.

Sr. Alonso. — Pero ése es un problema que se resolverá en la provincia de Córdoba, de acuerdo con las conveniencias económicas, fiscales y de fomento.

Sr. Simón Padrós. — Por eso estoy analizando el alcance económico en el sentido general de la industria de las cales, del aceite, de las pastas, del arroz o de cualquier otro producto que no se obtenga en una sola provincia. De ahí que haya habido en la Cámara dos orientaciones, dos instintos diferentes: el de quienes han sido más celosos de permitir la recaudación fiscal en las provincias a base de impuestos sobre parte de su producción; y el de los que hemos tenido el instinto de ir hacia la unidad económica de la explotación y hacia la defensa del consumidor y del productor.

En síntesis, señor presidente, sinceramente he creído que la redacción integral del inciso c) contemplaba la finalidad para el futuro y permitía esta unidad de impuestos internos nacionales en todos los renglones de la producción, estén en el presente gravados o puedan estarlo en el futuro. No sé me oculta que peor es nada; no se me oculta que el rechazo del inciso c) dejaría al despacho en la orfandad de una de las directivas que la ley ha perseguido; en ese sentido, comprendo la conciliación que representa la moción del señor diputado Ahumada porque ha mantenido esa unidad siquiera a los artículos alimenticios; es uno de los aspectos, es uno de los grandes grupos

en que la producción de las provincias hubiera podido ser gravada. En ese sentido, es una transigencia, pero no una solución integral como la que representa el inciso c) del artículo que discutimos.

Sr. Cordero. — Pido la palabra.

Se ha dicho reiteradamente que el propósito de la ley que consideramos, es evitar la superposición de los impuestos al consumo, que en la actualidad subsiste por imperio de la ley de impuestos internos, por la parte de la Nación y de los distintos gravámenes análogos establecidos por las provincias. Se ha dicho, también, que se propone uniformar los impuestos vigentes en todo el territorio de la República y, por último, eliminar las gabelas diferenciales establecidas en cada Estado y que, como barreras aduaneras, traban el comercio interprovincial.

Consecuente con dichos propósitos, la primera parte del artículo 18 ya votado, determina la obligación correlativa de las provincias adheridas a esta ley, de no establecer durante la vigencia de la misma, impuestos, tasas, tributos u otros gravámenes comprendidos en ella. En el inciso b), se reitera casi textualmente dicho artículo, agregándose solamente que «será nula toda disposición en contrario». Y como si esto no fuera suficiente, por los artículos 20 y 21 se repiten en forma más expresa y categórica las restricciones que contienen los mencionados preceptos.

Pero el inciso que consideramos no se refiere ya a evitar la duplicidad de impuestos internos. Por él se quita a las provincias otras fuentes de recursos, como los gravámenes a la producción de materias primas y de sus derivados y subproductos, y la transformación e industrialización de los mismos. Vale decir, que se les impone la derogación de varias otras leyes, fuera de las enunciadas al final de este artículo; así deberán suprimir las leyes que gravan los frutos y productos del país, esto es, los cueros, lanas, cerdas, plumas, etcétera, y para la provincia que represento, también, los impuestos a la explotación forestal.

De lo expuesto resultará que las pro-

vincias sólo podrán mantener como renta propia la producida por la contribución directa y las patentes, y todavía éstas con las restricciones impuestas en la segunda parte del artículo 21 y en el artículo 26.

Aquí cabe recordar la frase de Alberdi cuando dice que «crear un gobierno y no darle rentas, significaría tan sólo crear un nombre, no un poder».

Sr. Martínez. — Se refería al gobierno central, y hablaba de los impuestos aduaneros.

Sr. Cordero. — Se refería al gobierno central y a los gobiernos seccionales; y la observación es aplicable por igual a los gobiernos nacionales y a los gobiernos provinciales: de ahí que sea pertinente la cita.

Por la disposición legal que analizamos queda anulada casi en absoluto la atribución de las provincias establecida en el artículo 107 de la Constitución, cuando se refiere a los recursos propios de que pueden echar mano, cuya cláusula no contiene disposición alguna especial que concrete sus facultades para crearlos y que pudiera limitar el derecho en materia de imposición.

Fuera de lo expuesto, el inciso en discusión, importa una seria disminución al cálculo rentístico de la provincia de Santiago del Estero y está en contradicción con la mente del Poder Ejecutivo y con el despacho de la comisión que, por el artículo 2º, garantiza a las provincias la percepción de una suma igual a la mayor cantidad recaudada por concepto de impuestos al consumo en el último quinquenio.

Se ha fijado para Santiago del Estero como cantidad básica, por concepto de impuestos al consumo, 804.000 pesos, no considerándose sino los gravámenes por impuestos internos; pero por explotación de bosques tiene para este año 800.000 pesos y lo recaudado en los últimos cinco años representa 1.500.000, porque es sabido que los obrajes se hallan paralizados y la explotación forestal en sus rubros principales de producción de durmientes, rollizos, etcétera, se encuentra estancada. No se crea exagerada esta can-

tividad, pues ha habido años en que el presupuesto de la provincia de 6 y 7.000.000 se ha cubierto en su tercera parte con sólo la entrada por ese rubro. Hoy sólo se elabora carbón y leña y son estos únicos productos los que rinden la entrada mencionada de 800.000 pesos.

Por concepto de impuestos a los frutos del país se calcula una entrada al fisco provincial de cerca de 310.000 pesos, la que sumada a la anterior representa 1.110.000 pesos. De modo que por este inciso se le quita a mi provincia esa cantidad y sumada a los 804.000 básicos, forman 1.910.000 pesos, atribuyéndosele en cambio a Santiago del Estero para el año 1935 solamente 967.000 pesos.

Lo expuesto es más irritante si se considera que para el año entrante se nota cierta reacción en la industria maderera y los obreros se aprestan a reanudar sus trabajos. Solamente los Ferrocarriles del Estado han contratado cerca de 1.000.000 de durmientes, para ser entregados en el curso del año entrante, cantidad que, de acuerdo con la ley provincial, dejaría una renta de 500.000 pesos, pues cada durmiente es gravado con 50 centavos. Si a esta suma se le agregan los 800.000 pesos por leña y carbón y los 310.000 por frutos del país, podrá darse cuenta la Honorable Cámara cómo se cercenan, a la provincia que represento, sus recursos.

Por nuestra parte no podemos aceptar esa cláusula y su sanción obligaría a nuestra provincia a no adherir a la ley, desvirtuándose en esa forma el propósito anhelado por todos de establecer en materia impositiva un solo territorio para todo el país. (*Muy bien!*).

Sr. Bustillo. — Pido la palabra.

Para dejar simplemente constancia de que aunque he firmado el despacho de la mayoría, voy a acompañar con mi voto la proposición del señor diputado por Catamarca, por considerar que ella no altera los propósitos centrales de la ley y deja a salvo los derechos de las provincias. Creo que si mañana cualquier provincia abusa de

estas facultades, existe dentro del mecanismo de la ley la manera de corregirlo.

Con estas palabras, que explican el retiro de mi firma del despacho en mayoría, dejo fundado mi voto.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

Para hacer una breve observación enderezada exclusivamente a contestar al señor diputado Dickmann.

Comprendo la preocupación legítima del señor diputado de evitar que se reproduzca el espectáculo de la guerra interprovincial de tarifas que ha existido en nuestro país. Pero esa es una preocupación de todos, es un anhelo común; y creo que dentro del mecanismo de la ley está el recurso en virtud del cual se podrá satisfacerlo.

Voy a explicarlo. Supongamos que las provincias de Salta, Corrientes o Entre Ríos gravaran la producción de aceite. Está en manos del Congreso el recurso para que esa situación cese imponiendo sencillamente un impuesto nacional al consumo de ese artículo, con lo que cesaría automáticamente todo impuesto provincial.

Sr. Dickmann (E.). — Pero se crearía un mal impuesto nacional.

Sr. Ahumada. — Sería cuestión de fijar un pequeño impuesto que el consumidor ni lo notaría.

Sr. Dickmann (E.). — Es una falacia económica muy conocida la de que el consumo no va a resultar gravado.

Sr. Pena. — Siempre que lo que paga el consumidor importe una desgravación del impuesto de aduana, eso sería una verdad; pero en cuanto se pretende, como ocurre con el azúcar, sumar el impuesto al consumo al impuesto de aduana...

Sr. Ministro de Hacienda. — En el caso del azúcar se resta, en lugar de sumarse.

Sr. Dickmann (A.). — Pero en el aceite se sumaría...

Sr. Ahumada. — Repito que esta ley que vamos a votar pone en manos del Congreso de la Nación el recurso eficaz para hacer imposible la subsistencia de ese estado antieconómico dentro del territorio de la Nación.

La proposición que he formulado tiende a contemplar los dos aspectos que me preocupan: el derecho de las provincias y el de la Nación en esta materia impositiva. Las provincias se verían privadas, en el caso práctico que puse de ejemplo, del derecho de gravar el aceite, pero en cambio percibirán por su participación en el impuesto interno nacional una compensación correlativa. De esta manera no habrá una renuncia completamente infundada y sin motivo, que es lo que he considerado doctrinariamente objetable en todo momento.

He querido hacer esta aclaración para demostrar que si prospera la modificación que yo he proyectado, ella no significará abrir la puerta para que el espectáculo a que se ha referido el señor diputado Dickmann se reproduzca fácilmente en el escenario económico del país.

Nada más.

Sr. Aráoz (Ernesto M.). — Pido la palabra.

Los señores diputados por Catamarca y por Santiago del Estero han planteado, a mi juicio, una cuestión fundamental. Es evidente que el Congreso carece de omnipotencia legislativa para pronunciarse al margen de normas establecidas por la Constitución nacional. El error contenido en este inciso proviene de haberse confundido los impuestos a la producción con los impuestos al consumo. Ya sabemos que hay impuestos a la producción que en cierto modo podrían ser al consumo, porque vienen a incidir sobre el consumidor, que es quien los paga; pero hay una cantidad de impuestos a la producción en todas las provincias que gravan productos que están dentro del consumo interno nacional en lucha con productos similares de otras provincias y esos impuestos no inciden en forma alguna sobre el precio del artículo en el mercado interno nacional.

Si el costo de producción en una provincia permite gravar ese artículo, la provincia al hacerlo ejerce una facultad constitucional propia, puesto

que en ese caso se trataría de un impuesto directo, de los comprendidos en el inciso 2º del artículo 67 de la Constitución, que sólo autoriza al Congreso a sancionarlos como medida excepcional y a término fijo, y cuya creación como recurso permanente es del resorte provincial.

Sr. Dickmann (A.). — Le hago notar que se trataría de una renuncia voluntaria para acogerse a la ley.

Sr. Aráoz (Ernesto M.). — Hay muchas provincias que, como en el caso de Santiago del Estero, a que acaba de referirse el señor diputado Cordeiro, de sancionarse este inciso, perderán sus rentas, y que se verán en el trance de acogerse a la ley porque de lo contrario quedarán abocadas a una situación difícil. La adhesión voluntaria de las provincias, señor diputado Dickmann, me recuerda a la situación de aquellos voluntarios a quienes en la época de las guerras civiles se los mandaba al frente con las manos atadas como para que no se escaparan. Las provincias tendrán necesariamente que aceptar esta ley aunque legalmente nadie podría obligarlas, porque de no hacerlo su situación económica y financiera se tornaría difícilísima.

Por eso, entiendo que la Cámara debe considerar seriamente el caso planteado por el señor diputado por Catamarca.

Sr. Parodi. — Pido la palabra.

El inciso que se discute es de una importancia tal que de él depende el éxito o el fracaso de la ley, porque no creo que ninguna provincia argentina vaya a acogerse a ella si subsiste este inciso. No es posible pretender que las provincias renuncien a sus derechos más elementales de establecer los impuestos a que se refiere la Constitución. Por otra parte, esto significaría la ruina económica de las provincias, porque los tesoros fiscales quedarán completamente exhaustos por esta cláusula de la ley, ya que sólo le quedarían los impuestos de contribución directa y de patentes, y estos últimos podrían también discutirse.

Sr. Martínez. — ¡Que exagerada fantasía la del señor diputado!

Sr. Parodi. — Le parece, pero es la realidad.

Sr. Dickmann (A.). — A la provincia de Entre Ríos la afectaría en el sentido de que no podría hacer lo que hace, es decir, estaría impedida de establecer impuestos diferenciales a los fósforos. Hoy exime de impuestos a las fábricas de fósforos locales y en cambio grava fósforos nacionales, como si vinieran del exterior.

Sr. Parodi. — La provincia de Entre Ríos, y las demás provincias, mandaron sus representantes y tengo entendido que sólo prestaron su asentimiento al propósito de evitar los dobles y triples impuestos al consumo y a la guerra de tarifas a que aludió el señor diputado, que muchas veces en su propia defensa las provincias se ven obligadas a hacer. Pero de eso a limitar las fuentes fiscales de las provincias y sus derechos constitucionales, lo que significa anularlas políticamente, porque la anulación económica representa la anulación política, hay gran distancia. El propósito perseguido era unificar los impuestos al consumo pero no suprimir derechos de las provincias ni las fuentes de renta que la Constitución les acuerda. Me parece que el fin de la ley está suficientemente contemplado por el artículo 18 y que el inciso c) es absolutamente innecesario tanto que, como he dicho con la mayor sinceridad, no creo que haya provincia argentina que se acoja a la ley si se sanciona el inciso, porque no habrá ninguna provincia que incurra en la debilidad de suicidarse económicamente, y menos, sacando el asunto de su fase económica o comercial, que renuncie a derechos que la Constitución le acuerda. En tal situación dejarían de ser Estados autónomos para ser meras dependencias de la Nación.

Por estas razones, mi voto será completamente adverso al inciso c).

Sr. Noble (J. A.). — Pido la palabra.

En el seno de la comisión formulé al señor ministro un pedido de aclaración

respecto al alcance de este inciso. Deseaba establecer si el impuesto a los cereales y a los productos forestales que rige en la provincia de Santa Fe desde hace largos años, estaba comprendido en esta prohibición. La respuesta del señor ministro y de la comisión fué terminante en el sentido negativo. Quiero hacer presente esta situación y dejar constancia expresa de ella, para que el inciso no se preste a interpretaciones equivocadas, dándosele un alcance mayor que el que el señor ministro y la comisión le han fijado claramente.

Es un impuesto que nos resulta profundamente antipático. Hemos recibido la provincia de Santa Fe, con sus finanzas en una situación tal que no nos ha resultado posible prescindir de él, aun cuando el gobierno no ahorra esfuerzos para reducirlo. Es así cómo el gravamen al maíz ha sido ya disminuido y cómo en el presupuesto que se elabora en este momento, el gobierno se dispone a introducir una rebaja general no menor del 20 %. Si la participación de las provincias en el impuesto a las ventas y a los réditos hubiera sido tal cual lo reclamaba el gobierno de Santa Fe, este impuesto habría desaparecido. No hemos querido acogernos al carácter de provincia productora al discutirse esta ley en el seno de la comisión. Hubiéramos podido hacerlo con ventaja, pero no hemos deseado regularizar una situación que esperamos resolver en un plazo reducidísimo.

He querido hacer esta aclaración y poner a la Cámara en conocimiento de una situación que no puede dejar de considerar tal cual lo ha hecho la comisión. Me interesa que el señor ministro reafirme en el recinto cuanto he dicho respecto a su respuesta en el seno de la comisión.

Sr. Ministro de Hacienda. — Pido la palabra.

La discusión sobre este artículo, que está siendo un poco larga, es explicable por la dificultad de la materia. El señor diputado por Catamarca, doctor Ahumada, hizo una relación a mi modo

de ver exacta, de lo sucedido en la comisión respecto de este artículo, aun cuando olvidó decir lo que después expresó el señor diputado por la Capital.

Ha habido en esta materia un programa máximo y un programa mínimo. El programa mínimo de la ley es suprimir la doble, triple o múltiple imposición sobre los mismos artículos, unificando determinados impuestos y prohibiendo, por lo tanto, a las provincias volver a imponer ese gravamen sobre esos artículos. Esa era la reclamación mínima que podía hacerse en el sentido de la ley. La otra, la máxima, hubiera sido unificar todos los impuestos al consumo y renunciar las provincias a cobrarlos. No sé si las provincias están muy dispuestas a hacer esto último. A juzgar por las expresiones oídas en esta Cámara, de representantes de cuatro o cinco provincias, ese no es el estado de espíritu más general; pero si fuera así, y si hubiera de desaparecer el artículo tal cual está redactado por la comisión, es evidente que tendría gran ventaja la sanción que ha propuesto el señor diputado Ahumada, que en parte es más restrictiva, pero en parte es más extensa, pues comprende entre las exenciones los impuestos al consumo y también a la producción de ciertos artículos.

Ahora, sobre el carácter de los impuestos que se unifican, viene bien la pregunta hecha por el señor diputado por Santa Fe. Los impuestos no los paga en definitiva aquel a quien se le cobra — es una verdad elemental —; y el impuesto cobrado al trigo o a los cereales en general y al lino en la provincia de Santa Fe, es, en realidad, un impuesto a los réditos, a las rentas de lo que esos artículos producen, porque son artículos que se venden en el mercado externo o interno a un precio determinado por la cotización internacional de esos productos. No tiene analogía con los otros impuestos internos cobrados por las provincias sobre artículos gravados por la aduana federal; así que las soluciones que se adopten respecto de estos últimos, no tienen

por qué adoptarse respecto de los primeros.

El impuesto al trigo, a que aludía el señor diputado por la provincia de Santa Fe, unificado o no, no es un impuesto que grave al consumo nacional. Si la provincia de Santa Fe quiere mantener el impuesto a los réditos en forma de impuesto a la producción del trigo, lo hará con acierto o sin él. Los señores diputados recordarán que desde la primera reforma constitucional del año 1866, cuando se resolvió la supresión de los impuestos a la exportación, en la discusión que se hizo en el Congreso, entre gente de gran sentido práctico, se calificó esos impuestos como impuestos a la renta. Fué el doctor Marcelino Ugarte quien defendió esa doctrina. Eran, según se dijo, impuestos que gravaban a los productores territoriales de esos artículos.

Prescindamos, entonces, de toda consideración respecto al impuesto al trigo que no tiene nada que ver con esta ley. Ocupémonos de los otros, y respecto de los otros, si la Cámara no se decide, creyendo que no puede ser aceptable por las provincias, a unificar íntegramente los impuestos al consumo, no deje la ley trunca y establezca la disposición propuesta por el señor diputado Ahumada, que como lo han expresado algunos señores diputados, entre ellos me parece que el señor diputado Godoy, no deja desarmada la producción en el país y para el caso de una nueva guerra fiscal entre las provincias, esta ley crea la forma de solucionarla.

Nada más.

Sr. Noble (J. A.). — Por mi parte, me declaro ampliamente satisfecho con la respuesta del señor ministro.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a dar lectura de la proposición del señor diputado por Catamarca.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El nuevo inciso propuesto por el señor diputado por Catamarca, dice: c) que las provincias adheridas se obligan por el término de vigencia de esta ley, a no gravar en lo sucesivo, los productos

alimenticios en estado natural o manufacturado.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta negativa. Votan 97 señores diputados, haciéndolo por la afirmativa, 46.

Sr. Dickmann (A.). — Pido votación nominal. Considero tan fundamental el asunto, que deseo quede constancia para el futuro...

—Resulta suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

Sr. Corominas Segura. — Solicito que se invite a los señores diputados a ocupar sus bancas, para que la votación nominal no distraiga tanto tiempo.

Sr. Presidente (Ferreira). — Invito a los señores diputados a ocupar sus bancas.

Sr. Dickmann (A.). — Es de advertir que se trata de una rectificación, y que, por lo tanto, no pueden participar en ella los que no hubieran votado en la anterior.

—Practicada la votación nominal:

Sr. Prosecretario (Madero). — Han votado 52 señores diputados por la negativa y 40 por la afirmativa, en la siguiente forma:

—Por la negativa, los señores diputados: Ahumada, Alonso, Amadeo y Videla, Amoedo, de Andreis, Aráoz (Ernesto M.), Arrieta, Basualdo, Benegas, Bermúdez, Bruchou, Buitrago, Bunge, Bustillo, Cáceres, Candia, Cárcano, de las Carreras, Contte, Cordero, Corominas Segura, Costa Méndez, Escalera, Espil, Fernández, García Gorostiaga, Godoy, Gómez Rincón, Groppo, Gugliamelli, Iriondo, Jardel, López, Noble (R. J.), Palacio, Parodi, Pueyrredon, Radío, Rodríguez, Ruiz, Salas, Salcedo, Santillán, Schoo Lastra, Simón Padrós, Solís, Speroni, de la Vega, Viechi, Videla, Videla Dorna y de la Zorda.

—Por la afirmativa, los señores diputados: Agüero, Arce, Arnoldi, Berasso, Bogliolo, Briuolo, Buira, Castiñeiras, Coea, Della Latta, Dickmann (A.), Dickmann (E.), Ganza, Ghíoldi, Giménez, González (V.), Graffigna, Iribarne, Lamessa, Moret, Mouchet, Movsiehoff, Noble (J. A.), Oddone, Palacín (M.), Palacín (P.), Palmeiro, Penn, Pérez Leirós, Pfloger, Pintos, Ramiconi, Repetto (A.), Repetto (N.), Rozas, Ruggieri, Solari (J. A.), Uriburu, Vidal Baigorry y Vionnet.

Sr. Presidente (Ferreira). — Habiéndose rechazado el inciso propuesto por la comisión, corresponde votar el que ha propuesto el señor diputado por Catamarca en su substitución.

Sr. Dickmann (A.). — Nosotros lo vamos a votar, porque habiendo sido rechazado el inciso c), por lo menos que se apruebe éste.

Sr. Noble (J. A.). — Nosotros nos encontramos en el mismo caso.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observación, se aprueba el inciso d).

—En consideración el inciso e).

Sr. Bustillo. — Pido la palabra.

Solicito que se suprima la lectura de las leyes provinciales que se enumeran en este inciso, lectura que es innecesaria.

—Asentimiento general.

Sr. Presidente (Ferreira). — Habiendo asentimiento general, se suprimirá la lectura.

Sr. Noble (J. A.). — Corresponde tener en cuenta la observación formulada por el señor diputado Pena respecto a la ley 3.009 de la provincia de Entre Ríos, por la que se gravan las primas de seguros y que se encuentra en el mismo caso que la ley similar de la provincia de Tucumán, incluida en la enumeración que sigue a este inciso.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

No me opongo a que se tenga en cuenta la observación, pero quiero hacer notar que la enumeración contenida en el inciso que estamos considerando, es simplemente enunciativa, es una serie de ejemplos; todas aquellas otras leyes similares que por cualquier causa hayan sido omitidas en esta enumeración, están comprendidas dentro de la disposición del inciso.

Sr. Ministro de Hacienda. — No estamos muy seguros de que se haya expresado el concepto respecto de la ley que indica el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Noble (J. A.). — Así es. Por eso mismo quería que quedara constancia de que corresponde.

Sr. Godoy. — No hay ningún inconveniente, y a nombre de la mayoría de la comisión manifiesto conformidad con que se agregue la ley mencionada en la lista que contiene el despacho.

Sr. Pena. — Es en ese concepto.

Sr. Arce. — «Y cualquier otra de sus mismas características», ¿se refiere a impuesto o a provincias?

Sr. Godoy. — Se refiere a las leyes.

Sr. Arce. — ¿A qué leyes?

Sr. Godoy. — Hay, efectivamente, una deficiencia de redacción.

Sr. Ministro de Hacienda. — Es porque el artículo fué modificado por la comisión...

Sr. Arce. — ¿Y por eso está mal redactado? (*Risas*).

Sr. Ministro de Hacienda. — El artículo decía «leyes». Pero no se pueden derogar todas esas leyes, porque algunas contienen disposiciones de otro orden que no hay por qué derogar, se derogan sólo en cuanto establecen esos impuestos.

Sr. Arce. — Yo he desistido de algunas observaciones, a pesar de la importancia de la ley, que va a ir a la justicia muchas veces, porque he encontrado que la Cámara prefiere que las leyes salgan mal redactadas. Me limito entonces a hacer notar que aquí debe decir «cualquier otro».

Sr. Ministro de Hacienda. — Debería decir que se tendrán por derogados

los impuestos que crean las leyes que a continuación se mencionan.

Sr. Presidente (Ferreira). — ¿La comisión acepta?

Sr. Godoy. — No hay inconveniente.

Sr. Ministro de Hacienda. — Puede decirse que quedará derogado lo establecido por las leyes...

Sr. Corominas Segura. — Queda dicho que la enumeración no es taxativa.

Sr. Godoy. — Por eso se dice «y cualquier otra de las mismas características o que persiga igual o semejante objeto».

Sr. Simón Padrós. — Habría que cambiar simplemente, como propone el señor diputado Arce, la palabra «otra» por «otro», con lo que queda perfectamente aclarado el sentido y el alcance del artículo.

Sr. Alonso. — Es más correcta la redacción propuesta por el señor ministro, toda vez que después se hace una enumeración de leyes y no de impuestos.

Sr. Simón Padrós. — Hago notar a la Honorable Cámara que existiendo leyes, como crea que existen en Jujuy y algunas otras, en que en la misma sanción se crean impuestos que no se derogan ahora, es necesario decir que se derogan los impuestos y no las leyes.

Hago, pues, moción concreta aceptando la modificación propuesta por el señor diputado Arce, de que se sustituya la palabra «otra» por «otro».

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a dar lectura de la proposición del señor diputado Godoy.

—Se lee:

Se tendrán por derogados los impuestos que crean las leyes que a continuación se mencionan...

Sr. Simón Padrós. — No, señor presidente; así caeríamos en el vicio de la redacción inicial, de acuerdo con la cual se derogarían todas las leyes que se expresan, y eso es lo que precisamente quiere salvar la nueva redacción.

Sr. Ahumada. — Es demasiada sutileza la del señor diputado.

Sr. Simón Padrós. — La ley quedaría bien substituyendo la palabra «otras» por «otros», y esto es lo que ha motivado la observación.

Sr. Ahumada. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a dar lectura de la forma cómo quedará el inciso con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

—Se lee:

Que se tendrán por derogados los impuestos que crean las leyes que a continuación se mencionan para cada provincia, y cualquier otro de sus mismas características...

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar en la forma que acaba de leerse.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Ferreira). — La Presidencia debe advertir que en la enunciación de las leyes figurará la número 3.009, de la provincia de Entre Ríos, sobre impuesto a las primas de seguro.

Sr. Graffigna. — Pido la palabra.

Para pedir la inclusión en este artículo, de un nuevo inciso que diga: «Las provincias adheridas se obligan por el término de la vigencia de esta ley a no acordar primas a su producción que desvirtúen directa o indirectamente la igualdad de los impuestos nacionales unificados».

Puede suceder que en el futuro, nuevas fuentes de imposición surjan en algunas provincias en forma tal que al allegar al erario provincial fuertes aportes, permitan el establecimiento de primas para los productos de su industria, que entrarían así a competir deslealmente con los de industrias afines de otras provincias. Si realmente se persigue la igualdad de los impuestos y se quiere terminar con la guerra económica entre las provincias, no habrá inconveniente en la inclusión de este nuevo inciso, ya que la igualdad impositiva puede vulne-

rarse no sólo mediante la imposición de nuevos gravámenes, sino también por vía de una desgravación disimulada en forma de primas.

Es en virtud de estas razones que pido a la Honorable Cámara la inclusión de este inciso.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Personalmente — no a nombre de la comisión, porque ésta no se ha pronunciado — estoy muy de acuerdo con la proposición del señor diputado en el sentido de prohibir las primas. Todo lo que sea contribuir a evitar la lucha económica entre las provincias debe ser contemplado por la ley. Es evidente que sería un despropósito que los impuestos que las provincias reciben de la Nación los aplicaran como primas a sus industrias en detrimento de los productos similares de otras provincias.

Es por estas razones que, a título personal, adhiero a la proposición del señor diputado por San Juan.

Sr. Ahumada. — Pido la palabra.

Voy a defender una vez más el derecho de las provincias, y a este título me voy a oponer a la propuesta del señor diputado.

Este asunto fué llevado al seno de la Comisión de Presupuesto de una manera tangencial, aliría, porque el señor diputado Graffigna lo planteó sin ser miembro de ella. La comisión lo estudió y por mayoría resolvió no aceptarlo. Y se explica fácilmente que así sea. El Congreso de la Nación no puede inmiscuirse en esta clase de asuntos, ya que las provincias tienen por la Constitución, no sólo el derecho, sino la obligación de fomentar el desarrollo de sus industrias, y para ello deben utilizar los recursos legítimos que tengan en sus manos. El Congreso no puede en manera alguna decirle a una provincia que no puede utilizar el recurso de las primas para fomentar el desarrollo o el arraigo de tal o cual industria en su territorio, porque sería un absurdo e importaría un verdadero atropello a la autonomía provincial.

Por otra parte, la proposición del señor diputado nada tiene que hacer en una ley de esta índole.

Es en virtud de estas razones y esencialmente a mérito del respeto que debemos a las autonomías provinciales, que me pronuncio en contra de la proposición del señor diputado por San Juan.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 2º, doctor Roberto J. Noble.

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

El señor diputado por Catamarca se ha erigido en esta Cámara en líder de las autonomías provinciales. Pero las cuida mientras no se traduzcan en un beneficio o en una regalía. Sería concebible la actitud del señor diputado, si él se hubiera opuesto a la unificación en conjunto, porque ésta constituye una lesión a las autonomías de las provincias, en tanto ellas renuncien voluntariamente algunas de sus facultades para participar en los beneficios de la unificación. Pero cada vez que se trata de un artículo que es esencial para la economía de la ley y que contribuye a darle su verdadero carácter, entonces aparece la autonomía provincial. El señor diputado por San Juan, efectivamente, aun cuando no ha sido miembro de la comisión se ha acercado a ella, ha traído su proposición y ha tenido en su seno defensores, entre otros, los diputados socialistas. Consideramos que es una excelente proposición, que colabora muy bien al concepto de la ley y que, evidentemente, se refiere a hechos existentes. La provincia de San Juan ha establecido primas, y eso puede suceder en otras partes.

Por estas breves razones y sin reabrir un debate en momentos en que la Cámara está fatigada, dejo constancia de nuestro voto a favor.

Sr. Ministro de Hacienda. — Pido la palabra.

La proposición que llevó el señor diputado Graffigna al seno de la comisión y que trae de nuevo a la Cá-

mara, no tiene nada que ver con la ley de unificación. Es evidente que pueden las provincias llevarse cierta forma de guerra económica por el sistema de las primas, pero es evidente, también, que pueden usarlas con móviles totalmente distintos de la guerra económica y totalmente justificados. Las primas son de mil formas, directas o indirectas: una provincia que establece un Banco oficial, que presta en determinadas condiciones a alguna industria, que toma participación en el capital de cierta industria, que facilita el transporte de determinados productos, está favoreciendo su producción, y nadie puede creer que por eso esté vulnerando el principio que informa la unificación. Lo que la ley ha querido impedir, es que las provincias, so color de protección de sus industrias, establezcan barreras aduaneras.

La prima, señor diputado Graffigna, será una institución vituperable en determinados casos, pero no se la puede condenar en general. ¿Concíbese que alguna provincia, perfectamente apta para determinado cultivo y que no lo tiene todavía en explotación premie a los que inicien esa industria con el fin de tener después una fuente de riqueza? ¿Qué hay allí de censurable? ¿Por qué ha de criticarse semejante cosa?

Sr. Graffigna. — La desigualdad impositiva que importaría esa prima, es contraria a la Constitución.

Sr. Ministro de Hacienda. — La misma desigualdad existirá cuando una provincia no cobre la contribución territorial y nadie dirá que la contribución territorial debe ser única en todo el país para impedir la desigualdad impositiva.

Sr. Corominas Segura. — Y la desigualdad existirá hasta por la diferencia de salarios.

Sr. Ministro de Hacienda. — Concluyo diciendo que será un buen propósito el de combatir la guerra económica hasta por medio de primas. Si eso llegara a establecerse como costumbre, concibo que la Nación legislara sobre ello como lo ha hecho en materia de primas internacionales, pero no es ve-

rosímil que el sistema se generalice, porque la prima cuesta dinero a las provincias.

La protección por vía del impuesto indirecto era una fuente de recursos para las provincias, y entonces ellas se sentían completamente tentadas a hacerlo; pero no es verosímil que las provincias, con los recursos que tienen, los dediquen a estorbar las industrias de las demás.

En cuanto las provincias se dediquen a fomentar la propia industria sin estorbar la de las demás, y eso sea una tarea sana, no tiene por qué el Congreso argentino entrar a inmiscuirse en esa atribución provincial, precisamente para prohibir algo que podría ser aconsejable: que las provincias fomenten las industrias en su propio territorio.

Sr. de la Vega. — Pido la palabra.

Es evidente que uno de los grandes propósitos del proyecto, es crear sanciones que impidan lo que es tan deplorable en el país, creando un mal que se trata de salvar, mediante, precisamente, la aprobación de aquél. Me refiero a la guerra económica entre las provincias que es, posiblemente, el sentido superior que anima este proyecto, y que, cumplido, ha de servir, también, para salvar obstáculos de todo orden que tendrá durante su aplicación.

En la exposición del señor ministro, que me parece muy razonable en líneas generales, observo, sin embargo, un error que quizá le ha pasado desapercibido.

El señor ministro ha tomado el concepto general indudable, y ha dicho con toda razón: ¿cómo se va a impedir a una provincia el ejercer ese derecho que le acuerda la Constitución nacional y las provincias, que es crear estímulo, fomentos, a sus productos, a sus industrias, a sus actividades? Pero es que el concepto de la proposición del señor diputado por San Juan, en su verdadero significado es más restringido. Se refiere precisamente a los impuestos nacionales que se unificaren como consecuencia de la sanción de este proyecto de ley.

Creo que con el criterio con que estamos legislando y que se refiere más directamente a la unificación de determinados impuestos internos, no puede verse ningún inconveniente en que respecto de ellos vayamos a realizar este propósito de unificación en beneficio de la armonía fiscal y económica del país y que podemos también avanzar un poco más y aceptar el enunciado propuesto por el señor diputado por San Juan, que significará no quitarle a las provincias el derecho esencial y general de crear primas y estímulos a sus manifestaciones de progreso, de comercio, de industria y de producción, sino exclusivamente, en cuanto atañe a las industrias que están vinculadas directamente o sobre las cuales gravitan los impuestos que se trata de unificar mediante el proyecto de ley que considera actualmente la Cámara.

Además, considero que la proposición del señor diputado por San Juan, en cierto modo es concordante con un apartado despachado por la comisión en el artículo 26, apartado final que dice claramente que las medidas que adopten las provincias con motivo de la regulación de sus productos o de su comercio — que yo entiendo y he de aclarar después que ese artículo 26 sólo puede referirse al derecho de las provincias para regular su producción y comercio dentro de su respectiva jurisdicción territorial, — que el ejercicio de esa facultad que se les reconoce en cierta manera condicional, a las provincias, que yo haré lo posible por que se precisen en el sentido de que se limite exclusivamente a sus respectivas jurisdicciones territoriales, será de tal manera que no pueda incidir respecto de productos o de industrias de otras provincias en forma distinta que para los artículos o productos de la propia provincia o para los que salen de la provincia en forma distinta a los que se consuman en ella.

Por estas razones, voy a dar mi voto a la proposición del señor diputado por San Juan.

Sr. Pena. — Pido la palabra.

En realidad la objeción que se formula respecto de que esto pudiera ser obstáculo a la iniciación y desarrollo de cualquier actividad progresista en la jurisdicción de cualquier provincia, podría obviarse, porque entiendo que el propósito que persigue el señor diputado, con su agregado, se refiere a impedir el dumping en el mercado interno. Se trataría, entonces, de encontrar la redacción legal que hiciera imposible el dumping.

Sr. Ministro de Hacienda. — Eso estaría muy bien; por ejemplo si se dijera que el azúcar que se venda afuera de la provincia se ha de vender más barato que el que se consuma en la provincia, o cosas así, comprendo que se prohíba; pero las primas en general me parece que no.

Sr. Pena. — Entiendo que la idea del señor diputado, al formular su proposición, ha tenido en vista principalmente, que no se desarrolle el dumping.

Sr. Graffigna. — Efectivamente.

Sr. Pena. — De manera que habría que encontrar una redacción para ese propósito. Habría que evitar la creación de impuestos cuya devolución ulterior por los productos salidos de la provincia constituyeran un dumping.

Sr. Corominas Segura. — No puede haber ese problema, porque ese impuesto pasa a ser nacional.

Sr. Ministro de Hacienda. — El dumping se hará por medio de otras medidas.

Sr. Pena. — Por leyes provinciales puede hacerse de distintas maneras, porque ya sabemos el ingenio que hay, y sobre todo el señor diputado que representa a una provincia en que se ha desarrollado en forma extraordinaria y ahora precisamente después de las consecuencias que se han experimentado desean curarse en salud.

De manera que yo entendería la proposición en ese sentido.

Sr. Noble (J. A.). — Formulo indicación de que se postergue la consideración del agregado propuesto por el señor diputado y que la comisión proyecte un artículo que contemple lo

expuesto por el señor diputado Pena y por el señor ministro, y que ha aceptado el señor diputado por San Juan.

Sr. Godoy. — Que redacte un artículo contemplando el caso del dumping.

Sr. Corominas Segura. — ¿Sería para la sesión de hoy?

Sr. Noble (J. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — ¿Acepta el señor diputado por San Juan?

Sr. Graffigna. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Queda postergado.

—En consideración el artículo 20.

Sr. Arce. — Propongo que al final del primer apartado, donde dice «productos que soportan impuestos...», se ponga «productos que soporten...». De lo contrario, se podrán hacer 20.000 pleitos sobre el asunto.

Sr. Martínez. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar, con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—En consideración el artículo 21.

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Descartaría que el presidente de la comisión diera una explicación acerca del alcance del párrafo final del artículo 21, en cuanto se refiere a la contribución territorial y otras contribuciones directas sobre los campos que produzcan materias para la elaboración y fabricación de productos, y sobre los edificios, fábricas, etcétera.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Son muy claros la letra y el espíritu de la disposición. Se quiere evitar que el impuesto interno provincial que se suprime pueda ser aplicado en otra forma, por vía indirecta por las provincias. Por ejemplo, aumentando exageradamente la contribución territorial y otras contribuciones aplicadas a los campos destinados que produzcan ma-

terias primas esenciales para la elaboración o fabricación de productos cuyos impuestos se suprimen. No se prohíbe, como se ve, que las provincias establezcan impuestos de contribución territorial u otros semejantes, pero se establece que ese impuesto debe ser igual para todas las propiedades en condiciones semejantes, vale decir, que por razón del destino, de dichos campos, no pueden ser mayormente gravados que lo que lo serían, si esos campos fueran destinados al cultivo de otra clase de producto.

Espero que con esta declaración quede satisfecho el señor diputado por la Capital.

Sr. Pena. — Acepto la explicación del señor diputado, aun cuando esto se refiere a cuestiones complejas y es difícil precisar con exactitud la relación que se pretende crear con respecto a estos campos o propiedades. Son cuestiones heterogéneas y poco claras, enunciadas así de un modo general.

Declaro que la explicación del señor diputado me satisface, con buena voluntad, pero no alcanzo a percibir con exactitud el sentido exacto de esta disposición.

Sr. Martínez. — Es muy fácil.

Suponga el señor diputado — ya que le agrada el tema — el caso de un campo destinado a producir caña de azúcar y el de otro campo destinado a producir, por ejemplo, arroz. Las provincias no pueden gravar, entonces, los campos que produzcan caña, con una contribución directa mayor que las que gravan los campos destinados a producir arroz o cualquier otro producto. No puede existir desigualdad de tratamiento por razón de destino.

Sr. Pena. — La contribución directa territorial tiene una serie de modalidades. Puede tomar aspectos que resulten...

Sr. Ministro de Hacienda. — Se permite a las provincias cobrar contribución directa, no obstante la prohibición para gravar el suelo, o las fábricas en que se produzcan o elaboren determinados productos.

Sr. Dickmann (A.). — Que no se convierta la contribución directa en uno de esos gravámenes.

Sr. Ministro de Hacienda. — Debe ser un impuesto de carácter general.

Sr. Bustillo. — No puede haber tasas diferenciales, en una palabra.

Sr. Ministro de Hacienda. — No podría ponerse un impuesto, como decía el señor diputado por Córdoba, a los campos que soporten viña o caña, por ejemplo.

Sr. Martínez. — Por el hecho de soportar eso. Tiene que ser igual para todos los campos, sin distinción del destino.

Sr. Ministro de Hacienda. — Por el valor.

Sr. Dickmann (A.). — Por eso las valuaciones deberían ser siempre sobre la tierra libre de mejoras.

Sr. Martínez. — No diga eso a los diputados por Córdoba. Lo tenemos desde hace 20 años, y como ministro de Hacienda de mi provincia lo he aplicado también.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el artículo 21.

—Resulta afirmativa.

—Sin observación, se aprueban los artículos 22, 23 y 24.

—En consideración el artículo 25.

Sr. Ghioldi. — Pido la palabra.

El artículo en discusión comprende tasas que se aplicarán al vino, al azúcar, a la cerveza, existiendo también una cláusula general. Propongo, entonces, que se discuta y se vote por partes, porque en cada uno de estos apartados habrá discusión. Así, en primer término propongo que se discutan las tasas referentes a los vinos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Habiendo asentimiento, se votará en esa forma.

Sr. Godoy. — Pido la palabra.

Las tasas que establece el artículo 25 con respecto al vino, han sido ob-

jeto de discusión en el seno de la comisión, en repetidas oportunidades. Primó, en definitiva, el criterio que establece el despacho, contra la proposición que personalmente formulé de que se adoptara el criterio de una tasa única y voy a repetir esa proposición ahora, con la aquiescencia de la mayoría de la comisión.

La modificación que propongo está fundada en motivos que expondré brevemente.

Si bien es cierto que una tasa diferencial por graduación alcohólica, se justifica por el propósito superior de combatir la excesiva graduación alcohólica de los vinos, por desgracia una tasa como la que se ha establecido en el despacho, no alcanzaría las finalidades que se persiguen y en cambio sería un estímulo para que se prosiga y se intensifique uno de los grandes males de que adolece la industria vitivinícola: el estiramiento o aguamiento de los vinos en bodega. En efecto: al establecer una diferencia impositiva por grado alcohólico, se incitará a los productores que hayan obtenido un caldo natural de graduación alcohólica superior, a agregarle agua y por lo tanto, en esa forma, a rebajar sus mostos a la graduación que corresponda a la menor tasa impositiva.

Por otra parte, uno de los propósitos fundamentales que persigue esta ley, de unificación de los impuestos internos, es la de anular y hacer desaparecer las diferencias y privilegios de carácter regional para una misma industria, estableciendo, así, en la realidad, la unidad económica bajo un mismo pie de igualdad y con un solo cartabón, para medir a los productores de todo el país.

Este concepto fué atendido con la ecuanimidad que suele ser característica del señor diputado por la Capital, doctor Dickmann, fué atendida en lo que ella encierra de justa, en el seno de la propia comisión, sosteniendo que desde este punto de vista la proposición de la tasa única la encontraba aceptable aunque no deponía los motivos y razones que tenía, de otra índole,

para sustentar la tasa diferencial. En suma, señor presidente, la propuesta concreta, es que el artículo en su primera parte diga simplemente lo siguiente: «Los vinos genuinos de producción nacional o importados, pagarán como impuesto interno, por litro, la tasa de 5 centavos moneda nacional». Desaparecería todo lo que sigue en el despacho hasta el párrafo que comienza encabezado con las siguientes palabras: «El azúcar de producción nacional», etcétera.

Dejo así fundada la modificación que, como digo, cuenta con el asentimiento de la mayoría de la comisión y que por lo tanto iría en substitución de esa parte del despacho.

Sr. Graffigna. — Pido la palabra.

Adhiero en un todo a la proposición del señor diputado por Mendoza.

Este artículo establece un impuesto diferencial al vino en función de su grado alcohólico. Los vinos secos que pasen de 12 ½ grados de alcohol en volumen y los dulces naturales que contengan más de 13 ½ grados, tendrán un recargo de un centavo, dice el artículo 25. Esta diferencia es ilógica, contraproducente, anticientífica y antieconómica, desde cualquier punto de vista que se considere. El vino genuino es el producto de la fermentación alcohólica natural de uva a su estado de madurez fisiológica. El punto de madurez de la uva no está determinado solamente por el grado glucométrico o riqueza de azúcar que luego se traduce en grado alcohólico, sino en el perfecto equilibrio que de todos los componentes se produce dentro de específicas y determinadas condiciones climáticas, de suelo y de cepajes. Ese equilibrio varía de acuerdo a las modificaciones que sufren los factores antes citados. Así, por ejemplo, en un mismo cepaje, el equilibrio azucarino, con relación a los otros componentes de la uva, se produce a diversos grados glucométricos, según sean las condiciones de clima y suelo. Esta estricta interdependencia de factores es la que da a las uvas, en cada región, características sui generis e inconfundibles. De ahí que se afirme, y la ciencia

lo confirme, que el vino es un producto del suelo y del sol de la región que lo produce. Es más un producto del suelo que del cepaje; una cepa de Pinot, por ejemplo, en Francia, produce en forma muy diferente que la misma cepa en Mendoza. Dentro del mismo clima se advierten, también, diferencias derivadas de la distinta textura físico-química del suelo. Extensas regiones de Cuyo obtienen la madurez fisiológica perfecta de sus uvas cuando éstas adquieren más de 14 grados glucométricos, lo que significa que los vinos provenientes de las mismas alcanzan, normal y naturalmente, graduaciones alcohólicas superiores a 13 ½ grados.

Ahora bien: si persistiese en la sanción de la ley el despacho actual de la comisión, en virtud de las circunstancias antes mencionadas, los productos de Cuyo, para poder eludir la incidencia del recargo impositivo a los vinos que pasen de 12 ½, si son secos, y 13 ½ grados, si son dulces, vinos que — como he dicho — se producen naturalmente, tienen dos recursos para poder entrar en leal competencia y en igualdad impositiva con los de otras regiones del país. Esos recursos, que desde ya califico de condenables, son los siguientes: primero, hidratar los mostos; y, segundo, adelantar la cosecha con el fin de industrializar uvas a menor graduación glucométrica. La práctica de hidratar los mostos es inadmisibles porque está condenada por la ley y reñida con la ciencia y la moral. Y el recurso de adelantar la cosecha para obtener vinos de menor graduación es condenada también por la ciencia enológica, en mérito a las razones que expuse hace un momento. El punto de madurez de las uvas no está determinado únicamente por el grado glucométrico, que luego se traduce en grado alcohólico, sino por el perfecto equilibrio y armonía de todos los componentes de la uva: ácidos, azúcares, sales orgánicas y minerales, riqueza proteínica, aromas, etcétera, que dan al vino su peculiaridad y su fineza.

Muchas veces, uvas aparentemente maduras y aptas para el consumo de

mesa no están en condiciones industriales de ser cosechadas y producen vinos desarmónicos, con aristas perceptibles al paladar, y a veces fuera de ley, por carencia del porcentaje de extracto seco, debido a la ausencia de ciertas sustancias y sales minerales y orgánicas que la uva adquiere sólo cuando ha alcanzado su madurez fisiológica. Como ven los señores diputados, este impuesto diferencial vendría a inducir a prácticas que significan violentar la naturaleza sabia y generosa, expresamente en la región típicamente vinícola del país, o sea en la región de Cuyo, en detrimento de la calidad de su producción y, en consecuencia, de su intercambio comercial con el resto del país.

¿Qué dirían mañana los ganaderos si en el hipotético caso de que se sancionara un impuesto diferencial al ganado se gravara con más intensidad a los más gordos o se estableciera una escala en función de la gordura? Seguramente que los de las provincias del litoral protestarían porque se establecería una preferencia o privilegio para con las provincias del Norte y del Oeste, que los producen más flacos y de inferior calidad. Dirían asimismo que es un impuesto que atenta contra la calidad, ya que castigaría la buena producción mestiza y evolucionada del litoral en beneficio de la producción autóctona e inferior del resto del país; que, lejos de estimular la alta calidad que nos enorgullece en el exterior y nos enriquece, la deprimiría con gabelas injustas. ¿Qué dirían los fabricantes del tabaco si en vez de cobrarles impuestos diferenciales en función del precio de venta se lo hiciera en razón de la riqueza en nicotina de los tabacos?

Esta protesta se ha levantado en la región de Cuyo, privilegiada por la naturaleza para producir vinos de alta calidad y grado alcohólico, donde la evolución de la industria ha alcanzado un grado de progreso que sobrepuja a muchos países vinícolas.

No es posible, por otra parte, dejar

de hacer notar el mal precedente que importaría establecer en nuestra República normas o disposiciones en pugna con todo lo legislado en los países que marcan rumbos a la industria vinícola, con Francia a la cabeza, donde si bien es cierto el Estado fija los componentes mínimos que deben acusar los vinos para salvaguardarlos de las adulteraciones, jamás se han atrevido a limitar, controlar o castigar aquello que es obra generosa de la naturaleza.

A los que reputan que la ley debe tender a restringir el consumo de vinos de alto grado alcohólico so pretexto de luchar contra el alcoholismo, puede responderseles que la higiene establece que la dosis de alcohol que el organismo humano admite diariamente sin inconveniente alguno, es la de un gramo por kilo de peso del individuo que lo ingiere. Esta dosis es totalmente utilizada por el organismo, oxidándose en la célula y proporcionando energías y calor como cualquier otro hidrato de carbono. Para el consumidor que hace uso higiénico, y no abuso del vino, estas pequeñas diferencias de grado alcohólico no juegan por su ínfima cantidad en la dieta alcohólica normal, pues están dentro de las tolerancias dietéticas establecidas por la higiene. Un litro de vino común tiene 110 gramos de alcohol, más o menos. Un individuo normal puede beber 70 gramos durante las 24 horas. Un vaso de vino jamás puede tener más de 20 gramos de alcohol. Las diferencias de gramos de alcohol derivadas de las diferencias de graduación son tan insignificantes que casi nunca pasan de un gramo por vaso.

En cuanto a las otras objeciones que pueden hacerse, me remito a la extensa exposición que hizo el señor ministro de Hacienda de la provincia de San Juan en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En honor a la brevedad, voy a concretar mi indicación en los mismos términos en que lo ha hecho el señor diputado Godoy, o sea que se suprima ese artículo que establece impuestos diferenciales al vino en función del grado

alcohólico y que el artículo 25 se substituya en cuanto al vino se refiere por lo siguiente: «Los vinos genuinos de producción nacional o importados pagarán un impuesto interno único de 5 centavos moneda nacional por litro.»

Sr. Pena. — Pido la palabra.

La tramitación de este despacho ofrece sucesivamente sorpresas. Miembros de la comisión proponen modificaciones sobre puntos fundamentales que han sido motivo de larga dilucidación en la comisión, para llegar al acuerdo que ha permitido traer este despacho con la firma de la mayoría de sus miembros. Y en el caso especial del vino, es nada menos que el propio señor diputado Godoy el autor de este sistema, que la comisión aceptó y que ahora encuentra tan malo que propone modificarlo.

Sr. Godoy. — Hay un error: no he sido yo el autor de este sistema, que fué propuesto por el señor ministro de Hacienda y que ha venido de la oficina técnica del ministerio.

Sr. Pena. — La subcomisión encargada de este estudio, de la cual formaba parte el señor diputado Godoy, ha presentado esto a la consideración de la comisión.

Sr. Godoy. — Contra mi opinión.

Sr. Pena. — El asunto es claro y sencillo. Si se quiere establecer de una vez la llamada policía del vino, tiene que ser por vía del impuesto diferencial, de manera que no sea negocio vender agua, porque si es negocio vender agua, entonces, no habrá policía de vino, posible.

Admito que el señor diputado quiera elevar en un centavo cada uno de los tres términos de la escala, pero no acepto que quiera unificar el impuesto independientemente de la graduación alcohólica, porque es un principio universal en esta materia que los gravámenes aumenten en relación al grado de alcohol.

En el caso de la uva hay un problema industrial, además del problema de higiene pública: los industriales dejan que la uva pierda buena parte del agua por maduración excesiva, y se concen-

tre el azúcar; de este modo pueden echar una cantidad grande de agua y pagar así la uva a menos precio del que debe, y vender como vino una cantidad de agua. De manera que esto tiende a evitar esa doble dificultad; en tal sentido se lo aceptó en la comisión. Querer modificarlo ahora en el seno de la Cámara con una tasa única, sería inconveniente, porque hay dos razones como digo, una industrial y otra higiénica, para que esto se mantenga. Si los señores diputados creen que cuatro centavos es muy poco para los vinos de 9 grados, que le impongan cinco y aumenten los términos de la escala; pero la escala debe ser mantenida, es una medida prudente en cuestiones de vino y es lo que desde hace muchos años se viene reclamando. En todas partes del mundo ocurre eso; la provincia de Buenos Aires grava los vinos con un impuesto progresivo en relación a la cantidad de alcohol, y esto constituye un principio universal. De manera que no hay ningún sentido ni razón en la proposición que se discute, contra un despacho que ha tenido tal acogida y que ha sido traído aquí por la mayoría. Es una legislación concordante que tiene que iniciarse en nuestro país, porque está en retardo.

De manera que hay las dos razones enunciadas para que la proposición del señor diputado Godoy sea rechazada, y que, en consecuencia, se vote el despacho de la comisión.

Sr. Bunge. — Pido la palabra.

Deploro que al parecer un número importante de miembros de la comisión haya aceptado la modificación de este artículo del despacho, subvirtiendo totalmente su espíritu.

Entiendo que aceptándose esa modificación, la Comisión de Presupuesto se presentaría con tres criterios divergentes y contradictorios en materia impositiva sobre bebidas alcohólicas. Por la modificación de las tasas de impuestos internos se propone gravar a los licores a razón de un centavo por cada grado de alcohol Gay Lussac a 15° centígrados, principio perfectamente racional desde todo punto de vista,

incluso el principio fiscal. Eso simplifica la graduación del impuesto; por lo tanto, facilita su percepción y la hace más económica.

En materia de cerveza, el despacho grava esta bebida, relativamente más higiénica, a razón de un centavo por grado y un poco más, porque la graduación corriente de la cerveza es poco más de 4 % de alcohol, y la grava el despacho en 5 % cuando está constituida por malta de cebada exclusivamente argentina. La comisión introduce un criterio proteccionista en el cultivo de la cebada, criterio que no me asusta, por otra parte; grava en ocho centavos el litro de cerveza en la composición de cuya malta entre cebada de origen extranjero. Con buen acuerdo, por otro artículo, la ley de impuestos internos obliga a declarar cerveza no genuina a la producida con malta en que entra, no sólo la cebada, sino también el maíz y cualquier otro cereal. Pero vemos que aquí donde había un conato solamente del concepto universal de gravar a las bebidas alcohólicas en proporción a su riqueza alcohólica, se lo abandona.

Creo que sería inconveniente para la propia industria del vino gravar uniformemente a todos los vinos, sea cual fuere su riqueza alcohólica. En realidad, deberíamos llegar a gravar los vinos en la misma proporción que la cerveza, por lo menos en un centavo por cada grado de alcohol. Pocos impuestos podrían ser una fuente más sana como gravamen y más productiva: ese impuesto podría producir 70 millones de pesos al año, sin reducir prácticamente el consumo en las zonas en que puede considerarse más o menos normal; sólo en las zonas productoras sería reducido dicho consumo, donde es excesivo en gran parte porque hoy prácticamente el vino no paga en ellas ningún impuesto. Son precisamente San Juan y Mendoza las que más gravan los vinos; pero no gravan al consumo local sino los vinos que van a ser «exportados», como se dice en el lenguaje corriente de esas provincias.

Dado que no sería posible que la Cámara sancionara ese impuesto por grado de alcohol, que sería el régimen higiénicamente mejor, creo que por lo menos debe mantenerse el despacho de la comisión.

Encuentro inconvenientes a la tasa uniforme para todos los vinos: favorecería la corruptela actual de cosechar la uva demasiado tardíamente para obtener mostos demasiado dulces, que dan una alta graduación alcohólica. Esa corruptela, que me ha llamado enormemente la atención, sobre todo en San Juan, cuya uva en la época de la cosecha normal, Febrero, Marzo y Abril, es deliciosa y tiene hasta demasiada cantidad de azúcar, tiene por resultado que no pueda conseguirse la fermentación de esos mostos sino artificialmente acidificados, falsificándolos, agregándoles ácido sulfúrico, porque la uva en ese estado de excesiva madurez ha perdido su acidez natural. El uso, pues, del ácido sulfúrico para acidular los mostos, es consecuencia de la cosecha demasiado tardía de la uva.

Hay en esto, otra contradicción de la comisión. En el proyecto de la Junta Reguladora de Vinos, se establece que la autoridad de aplicación podrá fijar la fecha en que debe hacerse la cosecha. Este es un propósito muy sano, que tiene por objeto impedir la cosecha demasiado tardía y la falsificación consiguiente de los mostos; pero si gravamos uniformemente a todos los vinos, sea cual fuere su graduación, se mantendrá el actual interés creado que tiende a cosechar la uva lo más tardíamente posible para obtener vinos excesivamente alcohólicos, y se anulará todo propósito de higienización de los vinos, haciendo que ellos no sean realmente en la práctica lo que serían en la «teoría» expuesta por el señor diputado Graffigna: el producto de la fermentación natural del jugo de la uva cosechada en el momento de su madurez, que no sé si podría llamarse fisiológica, porque eso ha de depender en gran parte de los gustos.

La diferencia de graduación de cuatro, cinco o seis centavos es con toda

evidencia insuficiente. Además, el promedio de impuesto de cinco centavos es muy inferior al impuesto interno que hoy cobran numerosas provincias, con gran ventaja para el fisco; por lo tanto, lo menos que pueda hacer la Cámara es mantener esa tasa diferencial hasta tanto se llegue de una vez a implantar el concepto racional, conveniente en todo sentido, de gravar a los vinos y a todas las bebidas en proporción a su graduación alcohólica.

Declaro, sin embargo, que aprobaría y votaría con mucho gusto que a los licores se los gravara con dos centavos por cada grado y que el gravamen de un centavo por grado se limitara a las bebidas productos de fermentación natural.

Sr. Briuolo. — Pido la palabra.

Se han dado algunas razones a favor de la proposición del señor diputado Godoy, de que se reduzca el gravamen a un solo impuesto y se anule la actual escala establecida por la comisión.

El señor diputado Graffigna nos ha dado las razones de orden técnico que abonan esa tesis. Ha hablado elogiosamente de la mejor calidad del vino que sería castigada. Es una frase y aparentemente un argumento bien esgrimido. Pero es de advertir que los señores industriales o productores del mejor vino obtienen razonablemente un precio mejor, mayor demanda; y por tanto no considero, que el impuesto signifique un castigo.

Rechazo en absoluto las razones de orden higiénico. No creo que ningún médico lo aconsejara. Su acción tóxica...

Sr. Graffigna. — No es tóxico.

Sr. Briuolo. — Si el señor diputado ingiriera vino en peso equivalente a sus 80 kilos, (risas), habría de saber sus efectos.

Sr. Graffigna. — No hay que confundir el uso con el abuso.

Sr. Briuolo. — Sostengo que la escala que establece el despacho cuenta a su favor con las fundadas razones que con bastante autoridad expusieron los señores diputados Bunge y Pena, si es que no bastara el argumento de or-

den social cual es gravar lo que puede constituir una bebida más fuerte y menos recomendable por la cantidad de alcohol que contiene.

Si yo fuera industrial, diría que precisamente la manera de estimular la producción es propender a la mejor calidad.

¿Por qué va a pagar lo mismo una graduación menor que una mayor? La mejor calidad ha de determinar mejor precio, mayor demanda y, por consiguiente, será soportable la pequeña diferencia impositiva.

Indiscutiblemente, la comisión ha tenido en cuenta factores muy razonables para no propiciar ahora en la Cámara la anulación absoluta de la escala propuesta.

Es esto lo que quería expresar.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el despacho de la mayoría de la comisión en la parte referente a vinos, en su texto definitivo, que se leerá por Secretaría.

—Se lee:

Los vinos genuinos de producción nacional o importados, pagarán como impuesto interno por litro la tasa de 5 centavos moneda nacional.

Sr. Pena. — ¿Se va a votar el despacho de la comisión?

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Lo que se ha leído es el despacho de la comisión.

Sr. Godoy. — La mayoría de la comisión ha aceptado la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Se va a votar el despacho de la comisión, que acaba de ser leído por Secretaría.

—Resulta afirmativa.

—En consideración: «El azúcar de producción nacional o importado, pagará como impuesto interno, \$ 0,02 m/n. por kilo.»

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Desearía que se invitara al señor ministro de Hacienda, que tengo en-

tendido se encuentra en antecámaras, a ocupar su banca, pues ha quedado pendiente esta cuestión del azúcar, que debe ser aclarada y definida. Entre tanto, rogaría del señor presidente de la comisión manifestara su opinión respecto a la interpretación del ministro de Hacienda sobre el alcance de esta cláusula, en lo que atañe a la posibilidad de que pueda ser aumentado el derecho de aduana sobre el azúcar, con motivo de esta ley.

—Ocupa su asiento en el recinto, el señor ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

Sr. Martínez. — No he oído al señor diputado.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — La Presidencia invita al señor diputado a levantar la voz para que se le pueda oír.

Sr. Pena. — Cada vez que se habla de acústica, esto se pone peor. Mejor es no hablar de acústica.

Yo deseo que el señor presidente de la comisión manifieste si está de acuerdo con la interpretación dada por el señor ministro de Hacienda en lo que atañe al impuesto sobre el azúcar, con respecto al azúcar importado.

Sr. Martínez. — La interpretación que dió el señor ministro de Hacienda la suscribo íntegramente.

Sr. Ministro de Hacienda. — Creo que habría una solución mejor, cual sería la de computar, a los efectos de los 41 centavos, el derecho de aduana.

Sr. Pena. — Entonces voy a proponer que se incluya, donde se habla del gravamen al azúcar importado, las siguientes palabras: «El impuesto al azúcar importado será considerado como gasto inherente al despacho directo de aduana»; vale decir, que no se producirá el milagro de aumentar la cantidad por una inversión en el orden de los sumandos. La suma resultará siempre la misma, si es que nosotros calculamos este recargo en los

gastos directos de aduana, y el adicional debe referirse a la proporción que éste lo aumente.

Si se incorpora la disposición que propongo, quedaría el asunto aclarado dentro de la opinión del señor ministro de Hacienda, aceptada por el señor presidente de la comisión.

Sr. Ministro de Hacienda. — Yo sería más categórico que el señor diputado. Yo diría que el impuesto debe computarse a los efectos de determinar los 41 centavos.

Sr. Pena. — El azúcar que está regido por los 41 centavos es un azúcar determinado. Hay otros azúcares cuyos precios no están dentro de esa categoría y por eso es conveniente la proposición que formulo.

Sr. Arrieta. — No se oye nada al señor diputado. Podría levantar la voz.

Sr. Martínez. — Mejor sería que los señores diputados se acerquen a la izquierda, para poder escuchar.

Sr. Simón Padrós. — Entonces no oirían los demás colegas.

Sr. Pena. — El decreto del Gobierno Provisional para los azúcares de 96 grados o más de polarización, establece que se fijarán mensualmente, tomando como base...

—No alcanzan a percibirse las últimas palabras.

Sr. Arrieta. — El señor diputado habla para él y no para la Cámara. No es posible que continúe en esa forma.

Le ruego al señor diputado que hable en alta voz.

Sr. Noble (J. A.). — Es un decreto del Gobierno Provisional que deben conocer los señores diputados.

Sr. Arrieta. — Lo conozco, pero no se le oye nada al señor diputado por la Capital.

Sr. Pena. — Declaro que el asunto se obviaría considerando este gravamen como parte integrante de los gastos de despacho directo de aduana, de manera que se redujera en la cantidad equivalente al adicional a pagar.

Sr. Ministro de Hacienda. — Tal cual.

Sr. Pena. — Si el señor ministro de Hacienda cree que con una redacción más precisa pudiera llegarse a la misma conclusión, yo no haría cuestión alguna, porque lo único que persigo es la finalidad.

Quiero significar que en este asunto se ha combatido el régimen y estamos en la inseguridad más completa, porque lo que era antes la seguridad del mercado interno, de que el precio no aumentaría a más de 41 centavos por influencia propia del desarrollo de la industria, se ha transformado, en virtud de ese decreto, en la obligación, por vía de una aplicación caprichosa y torcida de la ley, que el precio sea de 41 centavos. Vale decir, que se ha invertido totalmente el sentido de la ley y el señor ministro de Hacienda estará conmigo en que es una inversión completa.

Sr. Ministro de Hacienda. — Ya le he dicho al señor diputado que en mi concepto el decreto del Gobierno Provisional no es un decreto reglamentario o que tenga esa apariencia. Es un decreto-ley que ha dictado cuando estaba concentrado en un poder la suma de los poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, y que esa situación no es susceptible de ser modificada, me parece, sino por una disposición legal.

Sr. Pena. — Pero la ley obliga a gravar con un derecho adicional a los azúcares importados, cuyos países de origen otorgaran primas a la exportación, y el decreto del Gobierno Provisional resolvió que todos los azúcares que estuviesen hasta 41 centavos, tenían primas a la exportación en los países de origen. Es una interpretación torcida y tortuosa de la ley. Es completamente ilegal lo que se está haciendo. Por eso, la Comisión de Negocios Constitucionales, a mi juicio, ha estado en retardo al resolver esta cuestión tan importante y nos plantea la cuestión de agravar este estado de cosas con una omisión tan gruesa en el cumplimiento de los deberes del Congreso, como es la de admitir a sus espaldas una comisión de interesados que resuelve que hay que poner un adi-

cional al derecho del azúcar como si fuera una obligación que impone la ley de declarar que la diferencia entre el precio de aduana del azúcar C. I. F. y el que quiere votarse por los industriales, tuviera la prima universal de todos los azúcares. De manera que me parece tan clara la cuestión que puede obviarse que este impuesto no sea una manera de agravar la situación legal encareciendo el azúcar en 0,088 oro. Propendría la solución que he sugerido y aceptaría cualquiera que, a juicio del señor ministro de Hacienda, fuera más categórica para resolver la cuestión.

Sr. Ghioldi. — El impuesto al azúcar importado se computará a los fines de la ley Saavedra Lamas.

Sr. Arrieta. — Pido la palabra.

La proposición del señor diputado Pena, modificada en parte por la del señor diputado Ghioldi, coincide en sus propósitos y finalidad con los que ha tenido la Comisión de Presupuesto al redactar este párrafo. Indudablemente, con aceptar esa proposición, modificándola en la forma que después expresaré a la Honorable Cámara, este asunto habría quedado terminado. Pero como en la discusión en general los señores diputados socialistas que han hablado informando esta ley en nombre de su sector, se han referido casi exclusivamente al asunto azucarero, no creo posible dejar pasar esta oportunidad sin aclarar ciertos conceptos equivocados que en esos discursos se han emitido.

Oyendo a los diputados socialistas Ghioldi y Pena en la discusión en general...

Sr. Pena. — ¿Me permite, señor diputado?

Lo escucho complacido, pero en condiciones similares habría una gran dificultad para que en este momento, sobre una cuestión en particular, se hablara en general. Complacido lo escucho y puede seguir con la palabra.

Sr. Arrieta. — Decía, señor presidente, que oyendo a los diputados socialistas Ghioldi y Pena, nadie hubie-

ra creído que se estaba discutiendo una ley trascendental como la unificación de impuestos internos en todo el territorio argentino; parecía más bien que se había traído al debate una vez más, uno de los tantos ataques que la representación socialista lleva a la industria azucarera argentina, ataque injustificado y que en aquel momento estaba como nunca de más en el debate.

Los dos señores diputados han hablado en nombre de su sector. Así lo han manifestado. Y yo pienso que si hoy tuviera el sector socialista que elegir entre la exposición clara, elegante, documentada, equivocada en gran parte pero leal del señor diputado Ghioldi, y la larga serie de inexactitudes que nos ha endosado el diputado Pena...

Sr. Pena. — ¡A probarlo!

Sr. Presidente (Noble R. J.) — Sírvase no interrumpir al señor diputado.

Sr. Arrieta. — ...con una completa inconsciencia sobre el tema, yo estoy seguro...

Sr. Pena. — ¡No puedo tolerar esas expresiones...!

Sr. Arrieta. — ...estoy seguro que el sector socialista se quedaría con la primera.

—Hablan a la vez los señores diputados Pena y Arrieta y suena la campana de orden.

Sr. Presidente (Noble R. J.) — Permítame el señor diputado por Jujuy.

El señor diputado por la Capital hace una reclamación respecto de las expresiones que ha vertido. La Presidencia lo invita a explicarlas y precisar su alcance.

Sr. Noble (J. A.) — No corresponden explicaciones, sino que se testen las manifestaciones del señor diputado.

Sr. Presidente (Noble R. J.) — Si, corresponden, señor diputado, de acuerdo con el artículo 154 del reglamento. La Presidencia invita, pues, al señor diputado a explicar el alcance de sus expresiones.

Sr. Noble (J. A.). — Y corresponde, también, que el señor diputado se ponga en la cuestión.

Sr. Simón Padrós. — Está en la reciprocidad de lenguaje.

Sr. Pena. — Necesita abogado..

— Suena nuevamente la campana de orden.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Arrieta. — Yo soy hombre muy sereno y muy prudente...

Sr. Pena. — Ya se ve.

Sr. Arrieta. — Se ve, señor diputado, cuando le hemos tolerado en la sesión del viernes, las impertinencias sucesivas que ha dicho en esta Cámara.

Sr. Pena. — Demuestre lo contrario.

Sr. Arrieta. — Se lo demostraré.

Sr. Pena. — ¡A ello, sin adjetivos! Yo no he usado adjetivos, sino cifras.

Sr. Arrieta. — La mayoría de ellas falsas.

Sr. Pena. — Son exactas. Use cifras usted también, que es ingeniero.

Sr. Arrieta. — Yo también traeré cifras que el señor diputado tendrá que aceptar, y demostraré que la mayoría de sus cifras son falsas.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Invito al señor diputado por Jujuy a dirigirse a la Presidencia y a atender sus indicaciones, a fin de solucionar el incidente.

Sr. Arrieta. — Decía, señor presidente, que soy un hombre sereno y prudente y en ese sentido no puedo sino declarar, como lo declararía cualquiera persona serena y prudente que lea la versión taquigráfica de las manifestaciones del señor diputado, que ellas han sido verdaderas con absoluto desconocimiento del asunto.

Sr. Ghioldi. — Hacemos la cuestión reglamentaria, señor presidente. No es tolerable que un adjetivo hiriente se quiera pasar como un calificativo científico. Eso es una burla, eso es intolerable. Y solicito del señor presidente que aplique la disposición reglamentaria.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Pido al señor diputado por Jujuy que explique o aclare si el término que ha usado se ha referido a falta de conocimiento del tema.

Sr. Arrieta. — Efectivamente; me he referido a eso. No hay más que leer la versión...

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Queda zanjada la incidencia, y la Presidencia testará las palabras inconvenientes.

Sr. Ghioldi. — ¡Cómo va a quedar zanjada la incidencia!

— Suena la campana de orden.

Sr. Ghioldi. — Pido la palabra para referirme a la incidencia.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ghioldi. — Al señor presidente no debe parecerle suficiente la explicación de la palabra inconsciente, diciendo que se refiere al desconocimiento del tema.

Yo creo que este debate, que se realiza fría y calculadamente tres días después de las palabras del señor diputado Pena, no puede llevarse a los términos a que lo conduce el señor diputado por Jujuy y que la palabra pronunciada por él, en forma insistentemente hiriente, no puede ser tolerada ni por la Cámara ni por la Presidencia. De lo contrario, significaría que en esta Cámara hay dos medidas y que la Presidencia aplica dos varas.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Puede tener la certidumbre el señor diputado, porque así ha procedido la Presidencia, que habrá de aplicar estricta y lealmente el reglamento...

Sr. Ghioldi. — Así lo espero.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — ...y que en esta circunstancia se ha atendido a los precedentes conocidos, de hace pocos días. El señor diputado por Jujuy ha tenido el propósito de explicar y la Presidencia interpreta que esa explicación no lesiona la personalidad moral del señor diputado por la Capital.

—Numerosas señores diputados hablan simultáneamente y suena la campana de orden.

Sr. Noble (J. A.). — El señor presidente debe pedir al orador que se circunscriba al asunto en debate.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — La Presidencia sabe cumplir su función y desea que los señores diputados no la asesoren desde las bancas.

Continúa con el uso de la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Arrieta. — Yo lamento esta incidencia y debo pedir disculpas al señor presidente y a la Cámara. Nunca es mi intención ofender a nadie, ni en el recinto ni fuera de él; pero es indudable que el diputado que no mide sus palabras y lanza acusaciones a diestra y siniestra, sin medirlas, sin comprobarlas...

Sr. Oddone. — ¿Pero sigue la incidencia?

Sr. Arrieta. — Estoy aclarando.

Decía que el diputado que hace eso, está expuesto a la legítima reacción consiguiente. Lamento si mi reacción ha sido excesiva y pido disculpas a la Honorable Cámara.

—Varios señores diputados abandonan sus bancas.

Sr. Noble (J. A.). — El señor diputado por Jujuy ha conseguido un éxito magnífico para la ley.

Sr. Arrieta. — El que lo ha conseguido es el señor diputado Pena.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — Continúa con la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Arrieta. — Entrando al tema, sorprende que haya podido hacerse en la discusión en general un debate tan extenso sobre una cuestión en realidad inexistente. Desde que esta ley no modifica en nada la ley Saavedra Lamas y no tiene ningún punto de contacto con ella, es indudable que todo lo que se ha pretendido decir acerca de sus alcances era injustificado. Ha sido una tormenta en un vaso de agua; y han bastado las palabras claras, precisas

y terminantes del señor ministro de Hacienda para que la cuestión quedara definitivamente cancelada. Pero para que no quede la más mínima duda ni sospecha alguna, he de proponer luego un agregado similar al que han propuesto los diputados Pena y Ghioldi.

No podría haber ninguna duda acerca de la intención que ha tenido la Comisión de Presupuesto a este respecto; y puedo recordar que en repetidas ocasiones, antes de tratarse en el recinto este asunto, he tenido ocasión de contestar personalmente preguntas de varios diputados socialistas aclarándoles el alcance preciso de este párrafo. Lamento que no estén presentes los diputados Bogliolo, Palacin y Briuolo, quienes podrían expresar que mi información coincidía en un todo con el concepto precedente.

Yo necesito, sin embargo, hacer algunas referencias a ciertos puntos que se han tocado en la discusión en general. Comprendo que el señor diputado Ghioldi no ha hecho cargos generales a la industria. Y aunque los hubiera formulado no me corresponde a mí desvirtuarlos, porque ya lo ha hecho mi distinguido colega el señor diputado Simón Padrós con el brillo, documentación y elocuencia que caracterizan todas sus exposiciones. Pero, evidentemente, el diputado Ghioldi al hacer su discurso, ha debido basarlo sobre datos que afectan a la industria en general y que, por lo tanto, estoy en el deber de aclarar.

Se nos ha explicado por los señores diputados socialistas, que la razón de haberse particularizado con un producto como el azúcar, es que, por esta ley, vendría a imponerse por primera vez con carácter nacional un gravamen sobre el consumo del azúcar. Los impuestos a los demás artículos que la Nación grava, no les preocupan porque son impuestos a los malos consumos, a los alcoholes, bebidas alcohólicas, cerveza, tabaco, cigarrillos, naipes, etcétera. Pero el azúcar, producto noble, de primera necesidad y de consumo popular, aparecería así por primera vez, en las tablas impositivas de la Nación; y ante este hecho poco auspicioso habría que

adoptar los recaudos indispensables para que el impuesto no recaiga luego sobre el consumidor. Preocupación estéril, porque indudablemente un impuesto de tal importancia que representa el 5 % del precio de venta del producto, es un factor que la industria deberá obligadamente recargar en su costo y trasladarlo, en cuanto pueda, al consumidor.

Sancionado este impuesto por esta ley, bajo pretexto de las necesidades financieras de la Nación y con el voto del sector socialista, es evidente que con este precedente se podrá mañana sancionar impuestos a otros productos de primera necesidad, como la carne, la leche, el pan, etcétera. Señalo el hecho porque constituirá, sin duda, un pésimo antecedente en la política fiscal argentina.

Pero el diputado Ghioldi, adelantándose a esta objeción y extremando el análisis, sostuvo que el azúcar puede gravarse sin preocupación por la circunstancia especial de que su precio de venta tiene por ley un límite máximo, que él califica de precio de carestía; y que desde el momento que el azúcar ha alcanzado ese precio máximo, el impuesto no incide ya sobre el consumidor sino que recae directamente sobre el productor. Apreciación equivocada, como lo paso a demostrar. Primero, porque la industria a pesar de los tres años que rige la ley reguladora tucumana, a pesar de los convenios interindustriales y a pesar del tan decantado monopolio, no ha conseguido todavía alcanzar el precio límite a que tiene legítimo derecho y que el decreto del Gobierno Provisional, de Febrero de 1931 le autoriza. Indudablemente en este sentido la información suministrada por el diputado Ghioldi no es exacta. El nos ha dicho que actualmente rige en plaza el precio de 4.10 en las ventas al por mayor. Pero la verdad es que, en la práctica, el azúcar está vendiéndose al por menor a precios que oscilan entre 38 y 40 centavos por kilo para la refinada y de 35 a 37 centavos por kilo para la granulada. Tengo aquí en mi banca veinte o treinta

catálogos de despensas y almacenes donde se ofrece el azúcar a los precios que acabo de expresar y que en obsequio a la brevedad no leeré, pero que me permitirá insertar a continuación en el Diario de Sesiones con permiso de la Honorable Cámara.

Gran Despensa «Perú», Perú 602.

Azúcar refinada 38 ctvs. el kilo
" granulada «Corona» . 35 " " "

Grandes Almacenes «El Barato Familiar», Bolgrano 3231.

Azúcar refinada «S. Martín» 38 ctvs. el kilo
" granulada «Leach's» 35 " " "

Despensa «Uruguay», Uruguay 984.

Azúcar refinada 38 ctvs. el kilo
" granulada 35 " " "

Gran Provisión «Lima», Chilo 1100.

Azúcar refinada 38 ctvs. el kilo
" granulada «Corona» . 35 " " "

Grandes Almacenes «Ruiz», Victoria 1299.

Azúcar refinada 38 ctvs. el kilo
" granulada 35 " " "

Casa Buzoni, Vieytes esquina Australia.

Azúcar Refinería «Ledesma» 38 ctvs. el kilo
" granulada «Corona» 37 " " "

Casa Ferreirós, Bartolomé Mitre y Montevideo.

Azúcar refinada 38 ctvs. el kilo
" granulada «Corona» . 35 " " "

Almacenes «Pose», Santa Fe 4600 y San Juan 3600.

Azúcar refinada 38 ctvs. el kilo
" granulada «Corona» . 35 " " "

Almacén «El Imparcial», Victoria 1001.

Azúcar refinada 39 ctvs. el kilo

Almacén Suizo, Santa Fe 1479.

Azúcar refinada 40 ctvs. el kilo
 " granulada «Corona» 38 " " "

Almacén «La Favorita», Rivadavia 2122.

Azúcar refinada 40 ctvs. el kilo
 " granulada «Corona» 39 " " "

Provisión Argentina «Spotorno», Santa Fe 2521

Azúcar refinada 40 ctvs. el kilo

Gran Provisión «Batalla», Entre Ríos 739.

Azúcar refinada 40 ctvs. el kilo
 " granulada «Corona» 38 " " "

Hago presente que estos precios son después de haber pasado el artículo por tres manos: del industrial al mayorista por intermedio del consignatario, del mayorista al minorista y de éste al consumidor.

Es evidente, entonces, que no habiendo sido alcanzado el precio de venta límite, el impuesto al azúcar gravitará inmediata e indefectiblemente sobre el consumidor. Pero aun aceptando por un momento que por cualquier circunstancia se alcanzara el precio límite, el precio máximo, ¿podría ser duradero ese precio? A juzgar por las palabras del señor diputado Ghioldi, que parece haber estudiado el complejo asunto azucarero muy minuciosamente, eso no sería posible, porque la situación derivada del acuerdo interprovincial sería insegura y artificial, de equilibrio inestable. Siguiendo el raciocinio del señor diputado Ghioldi, tendríamos así que a breve plazo el azúcar volvería a bajar de precio y nuevamente el impuesto estaría incidiendo sobre el consumo. En uno u otro caso es indisecutible que el impuesto al azúcar contribuiría a aumentar el precio de costo del producto y recaería sobre el consumidor.

Dejo expuesto este raciocinio porque deseo aclarar la situación ante la

Cámara. Indudablemente que la solución más aceptable dentro de ese temperamento hubiera sido la supresión del impuesto interno al consumo del azúcar, bajando en la misma cantidad el derecho adicional de aduana, es decir, reducir en igual proporción el precio límite establecido por el decreto ley del Gobierno Provisional, con lo cual el consumidor adquiriría azúcar más barata y sin que el productor resultara beneficiado por la medida. Sin embargo, por nuestra parte, no hemos formulado proposición concreta en ese sentido por no provocar por tal causa un déficit en la financiación de la ley.

Deseo referirme ahora a otro aspecto. El señor diputado Ghioldi cada vez que se ha referido al precio límite, lo ha calificado como precio de carestía. Hay en ello un error, ya que el límite de 41 centavos para azúcar refinado es un precio muy inferior a los que rigen en la mayoría de las naciones del mundo y es precio que apenas permite a las empresas azucareras argentinas desenvolverse sin pérdidas. He de demostrar ambas cosas.

El señor diputado Ghioldi decía que hoy puede llegar a Buenos Aires azúcar extranjera a 17 centavos C. I. F. Es exacto; pero lo que no nos decía el señor diputado Ghioldi es el precio que paga el consumidor en el país de origen, Checoslovaquia. En ese país, el kilo de azúcar se vende al público a 6,20 coronas que en moneda argentina representan hoy 87 centavos por kilo. Y la razón está que en dicho país, como en todos los que producen azúcar en exceso, se practica el dumping en forma oficial, fijándose a cada fábrica azucarera la cuota de venta que puede colocar en el mercado interno a un determinado precio que le compense la pérdida que debe sufrir en la exportación del excedente a precios ruinosos.

Mi estimado colega Simón Padrós, dió en la sesión del viernes los precios vigentes en los distintos países. Son tan altos, que la representación socialista expuso dudas sobre la legitimidad de los mis-

mos, alegando que habían sido obtenidos por intermedio de nuestra representación diplomática y consular en los diferentes países. Yo traigo hoy datos similares, procedentes de la más alta autoridad estadística: la Oficina Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, publicados en el tomo «Año Social 1933», que tengo en mi banca; y estos datos demuestran que en la Argentina el precio del azúcar, en comparación con los que rigen en el mundo, dista mucho de ser un precio de carestía. Con el permiso de la Honorable Cámara, insertaré a continuación la planilla respectiva:

SOCIEDAD DE LAS NACIONES

Precios que paga el consumidor por cada kilogramo de azúcar refinado en los distintos países.—Oficina Internacional del Trabajo, «Año Social 1933», Edición 1934.

PAISES	Precios por kg. en las distintas monedas	Al cambio del día 3 de Diciembre de 1934	Precio por kg. en \$ m/n.
Alemania . . .	0,75 R. M.	138,—	1,04
Austria	1,34 Sch.	65,76	0,88,12
Bélgica	2,30 Fr.	—	—
Canadá	12,1 Cents.	343,78	0,41,60
Estados Unidos	11,2 „	343,78	0,38,50
Francia	3,98 Fr.	22,67	0,90,22
Inglaterra . . .	5,1 Pence	17,10	0,36,31
Irlanda	6,— „	17,10	0,42,72
Italia	6,35 Liras	29,31	1,86
Letonia	0,62 Lats	—	—
Noruega	0,63 Cr.	85,93	0,54,13
Países Bajos . .	0,41 Fl.	232,31	0,95,25
Polonia	1,43 Zlotis	65,60	0,93,80
Portugal	4,10 Esc.	15,55	0,63,75
Checoslovaquia.	6,08 Cr.	14,35	0,87,25
Yugoeslavia . .	14,50 Din.	8,12	1,18
Hungría	1,30 Pengos	79,70	1,03

En cuanto a las ganancias de sociedades azucareras argentinas, el señor diputado Pena dió en su exposición algunos datos, algo incompletos, pero que por sí mismos demuestran lo contrario de lo que el diputado Pena quiso demostrar. Basta considerar que en

la Argentina trabajan cerca de 30 compañías azucareras. Entre ellas, el diputado Pena ha extractado 4, elegidas indudablemente entre las de mejor resultado, y nos ha leído sus respectivas ganancias, que, dichas en cifras absolutas, parecen grandes, pero que referidas a sus capitales respectivos se reducen y pueden apreciarse en su justo valor. Así, el Ingenio Ledesma, que había ganado en el año 1933, según el diputado Pena, 1.887.773 pesos, pero que en realidad ganó pesos 1.691.860, representa un rendimiento de 4,70 % sobre el capital invertido. El Ingenio Bella Vista, tuvo una utilidad de 3,80 %; el Ingenio San Pablo, 5,15 %, y el Ingenio Cruz Alta, 4,35 por ciento. Todos ellos, porcentajes bien reducidos para explotaciones industriales.

Pero lo curioso es que el diputado Pena acepte como lógico sacar conclusiones de las ganancias de sólo estos cuatro ingenios y omita los datos de un mayor número de compañías, lo que de hacerse indudablemente rebajaría el promedio de rendimiento a términos mucho más bajos.

Dejo así refutadas las aseveraciones más importantes del señor diputado Ghioldi en cuanto a la cuestión en general.

Pero hay todavía otra cuestión sobre la cual deseo, antes de terminar, llamar la atención de la Honorable Cámara, con esta pregunta concreta: ¿si a pesar de mis precedentes palabras, se resolviera mantener un cierto impuesto interno al azúcar, desde cuándo y sobre qué azúcares se aplicaría? El proyecto establece que será sobre el azúcar que se entregue al consumo a partir del 1º de Enero de 1935. Y entonces surge la siguiente observación: los stocks invendidos..

—Suena la campana que anuncia la expiración del término acordado al orador.

Sr. Presidente (Noble R. J.). — La Honorable Cámara decidirá por una votación si el señor diputado puede

continuar en el uso de la palabra quince minutos más.

Sr. Iriondo. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Noble R. J.). — In-

forma la Secretaría que no hay número en la casa.

Queda levantada la sesión.

—Era la hora 19 y 40.